



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

EL DERECHO COMO INSTRUMENTO TRANSFORMADOR DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. UN ESTUDIO A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE LAS MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Karen Viviana Díaz Villalobos¹

Resumen

El análisis de la experiencia de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano da cuenta de los estereotipos arraigados en la comunidad, que profundizaron la violencia y exacerbaron los daños que no son colaterales de un conflicto armado, son impactos que se reforzaron gracias a una historia colectiva de opresión y subordinación que se enmarcan en las relaciones entre hombres y mujeres. El feminismo, pone en evidencia estas cargas desiguales y cuestiona un sistema, una ideología y una cultura dominante que considera a las mujeres objeto de control, y en el marco del conflicto, objeto de control bélico. En ese sentido, analizar las propuestas y enfoques desde diferentes teorías feministas permite que el Derecho sirva como herramienta y adopte un tratamiento diferenciado al daño ocasionado a las mujeres en razón del conflicto armado, tanto en el ámbito legislativo como en el judicial y con ello promueva la transformación de los estereotipos de género que profundizaron los repertorios de violencia, pues ésta apuesta puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa en términos de igualdad entre hombres y mujeres.

Palabras Clave: Género, Conflicto Armado Colombiano, Instrumentos Jurídicos, Violencia Sexual, Mujer, Feminismo.

¹ Artículo resultado de investigación elaborado para optar por el Título de Abogada en la Universidad Católica de Colombia por parte de la Estudiante del programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Correo institucional: kvdiav65@ucatolica.edu.co. Este artículo fue dirigido por Ana María Gonzalez Valencia, docente investigadora de la Universidad Católica de Colombia. Abogada de la Universidad del Rosario y Maestra en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid.

THE RIGHT AS A TRANSFORMING INSTRUMENT OF GENDER STEREOTYPES. A STUDY FROM THE EXPERIENCE OF WOMEN IN THE COLOMBIAN ARMED CONFLICT

Abstract

The analysis of the experience of women victims of the Colombian armed conflict reflects the stereotypes rooted in the community that deepened the violence and exacerbated the damage that is not collateral of an armed conflict, are impacts that were reinforced by a collective history of oppression and subordination that are framed in the relations between men and women. Feminism exposes these unequal burdens and questions a dominant system, ideology and culture that considers women under control, and within the framework of conflict, an object of war control. In this sense, analysing proposals and approaches from different feminist theories allows understand how the Law is a tool and adopts a differentiated treatment of the harm caused to women by the armed conflict, both in the legislative and judicial spheres and the transformation of gender stereotypes that deepened the repertoires of violence, since this commitment can contribute to the construction of a fairer society in terms of equality between men and women.

Key Words: Gender, Colombian Armed Conflict, Legal Instruments, Sexual Violence, Women, Feminism.

Sumario

Introducción. 1. El derecho como instrumento para la igualdad de las mujeres. Una revisión de la teoría feminista. 2. Los repertorios de violencia contra la mujer en el conflicto armado colombiano: Un análisis de los estereotipos de género que los promueven. 3. Los instrumentos jurídicos y el Conflicto armado en Colombia: Tratamiento normativo a los temas relacionados con las mujeres en el contexto del conflicto armado. 4. Los instrumentos jurídicos en el marco del conflicto armado: Herramientas que transforman los estereotipos de género en Colombia. Conclusiones. Bibliografía

Introducción

El feminismo ha centrado sus esfuerzos en debatir sobre el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad, gracias a sus iniciativas se ha hecho un alto en distintos campos del mundo global para observar de forma crítica los roles que se han construido sobre lo femenino y lo masculino; la manera en cómo estas construcciones sociales han sido inculcadas mediante conceptos normativos y simbólicos (doctrinas religiosas, educativas, legales, políticas, etc.) y se han consolidado bajo una idea de naturalidad y permanencia atemporal, que las hacen convertirse en ideas hegemónicas que puede llegar a vulnerar a los subalternos.

También se ha explicado que los imaginarios sociales sobre el género femenino han sido la causa por la cual los sujetos identificados allí (generalmente mujeres) tienen obstáculos en la realización satisfactoria y decisión autónoma de sus planes de vida, ya que están prescritos los parámetros bajo los cuales deben desarrollarlo. Así mismo, se ha relegado una masculinidad sobre los hombres (sujetos que se identifican dentro del género masculino); la cual se traduce en poder sexual, bélico, económico, político o moral. El poder es un atributo que fluye de la posición femenina a la masculina, ya sea en forma de subordinación o servidumbre.

Por lo tanto, en un primer momento del presente artículo se realizará una revisión de la teoría feminista y las diferentes líneas de análisis que plantea. El feminismo se ha propuesto trabajar desde una teoría crítica feminista (de forma paralela a su desarrollo como movimiento social) considerada por algunos autores (Amorós y Miguel 2007) como teoría militante; con el propósito de conceptualizar, desarticular las falacias, los prejuicios y las contradicciones que legitiman la opresión hacia las mujeres, así como revelar las dinámicas sexo-género en la sociedad. Acto seguido, se establecerá la relación entre el feminismo y el Derecho con el objetivo de evidenciar que este puede ser una herramienta que contribuya a transformar estereotipos de género que en contexto de conflicto armado colombiano refuerzan la violencia en contra de las mujeres.

En ese sentido, el conflicto armado en Colombia es un fenómeno en el que estos factores identificados por las teorías feministas pueden evidenciarse. Toda vez la guerra es, principalmente, un espacio para las masculinidades ya construidas: el hombre crudo, fuerte, heroico, violento, entre otros. También es un espacio en el que se avala el mandato de masculinidad mediante pruebas o condiciones: ¿cómo debe comportarse un <<verdadero>> hombre?, ¿cómo deben los hombres mantener el control sobre las mujeres y sobre su comunidad? Aunque los anteriores cuestionamientos son dinámicas de la sociedad patriarcal

que construye a los sujetos masculinos y femeninos, en un escenario bélico o de conflicto armado, la validación de estas construcciones y del patriarcado es de mayor impacto dentro de la guerra porque implica necesariamente el uso de la violencia, la cual es ejercida principalmente contra las mujeres. La violencia que se ejerce contra los cuerpos y las humanidades de las mujeres en un conflicto bélico no es la batalla directa contra el enemigo que debe derrotarse para ganar la guerra, es instrumental porque permite a los actores armados habitar la violencia, enseñar la naturalidad de esta y utilizar los cuerpos femeninos como bastidores en los cuales se dan lecciones de crueldad en la sociedad que desean controlar.

De ahí que, es necesario realizar un estudio de los repertorios de violencia perpetrados a las mujeres en el conflicto armado colombiano. Esto permite dilucidar no solo los estereotipos de género que promovieron la intensificación de esas formas de violencia contra esta población, también permite evidenciar la exacerbación de las estructuras del poder masculino en la sociedad colombiana durante la guerra.

Siguiendo con la línea de análisis propuesta y buscando dar respuesta a la pregunta de investigación sobre si los instrumentos jurídicos creados por el Estado Colombiano contribuyen a la transformación de los estereotipos de género que, en el marco del conflicto armado colombiano, promovieron los repertorios de violencia sufridos por la mujer; se analiza cuáles fueron los instrumentos jurídicos creados por el Estado colombiano que buscan atender las diferentes problemáticas que sobrevinieron a causa del conflicto armado. Esto nos aporta un panorama sobre las respuestas ofrecidas por el Derecho a los fenómenos de violencia en contra de las mujeres en este contexto.

Finalmente, podremos concluir si estos instrumentos creados por el Derecho pueden ser una herramienta que cambia los estereotipos de género que agudizaron el sometimiento de las mujeres a repertorios de violencia deshumanizantes dentro del conflicto armado colombiano. Dicha transformación ha sido el objetivo por el cual el feminismo se ha movilizado durante las últimas décadas para lograr el replanteamiento progresivo de aquellos discursos y prácticas que socialmente se han naturalizado y que perpetúan imaginarios sexistas y misóginos.

1. El derecho como instrumento para la igualdad de las mujeres. Una revisión de la teoría feminista.

Un acercamiento al feminismo nos va a exponer como primera medida que dentro de sus cimientos hay una negación hacia todo aquello que se considera “natural” en la caracterización tradicional de la mujer. Se critica el hecho que esa naturaleza es un concepto construido en sociedades -predominantemente masculinas- con la finalidad de salvaguardar la posición de privilegio del hombre y la natural sumisión de la mujer en los esquemas patriarcales en que ambos conviven. Ese sometimiento de la mujer se ordena sobre su naturaleza, su sexualidad y la función doméstica para con su entorno.

Se ha observado que planteamientos básicos por parte del feminismo –aunque no se trata de una concepción homogénea- son evidenciar las desventajas de las mujeres en términos de igualdad o desigualdad y la obstrucción del desarrollo libre de su proyecto de vida. Además, asumir un compromiso político para transformar estas ficciones que están arraigadas en las sociedades y alcanzar condiciones más justas para hombres y mujeres.

Sin embargo, llegar al consenso de conceptos homogéneos dentro del feminismo ha provocado grandes disparidades internas, dificultades organizativas, entre otros motivos de crítica. De ahí que coexistan múltiples líneas de análisis en su interior, las cuales se diferencian dependiendo de la manera en que cada mujer o conjunto de ellas entiende su opresión dentro de la sociedad².

Tipos de feminismos

Partiendo del hecho que los tipos de feminismos se van a diferenciar dependiendo del modo en que cada uno entiende la opresión de la mujer en la sociedad, para el siguiente aparte se traerá a colación la clasificación propuesta por Isabel Cristina Jaramillo en la introducción que realiza a la obra de Robin West, Género y Teoría del Derecho. (Jaramillo en West, 2004).

En su planteamiento afirma que, conforme se diferencian los feminismos por su forma de comprender la opresión también reflejarán las diferentes transformaciones que se proponen y las estrategias políticas que asumen.

² En relación con el derecho, cada tipo de feminismo se va a diferenciar entre sí partiendo del hecho de la forma en cómo se comprende el derecho y sus relaciones con otras esferas de la vida social.

Feminismos de la igualdad

Dentro de esta primera distinción de feminismo, ubicamos a aquellos lineamientos teóricos que consideran que las mujeres son oprimidas porque no son tratadas de modo igual a los hombres. Ahora bien, en este primer grupo se incluyen a su vez distintas interpretaciones de lo que significa la igualdad que se pretende. Dentro de los feminismos de la igualdad se encuentran:

- ✓ Los tipos de feminismos que reclaman igualdad respecto a las oportunidades:

a.) Feminismos liberales clásicos

Persiguen una igualdad en las oportunidades formales. Sus cimientos datan en el contexto de la Revolución Francesa. Afirma María Suárez que:

En este proceso originario la mujer reclama su condición de sujeto político y la obtención de una igualdad radical y característicamente asexual. Con esto, no se lograron grandes cambios pues la esperanzadora igualdad ilustrada se constituyó como la igualdad genuinamente masculina en el plano político y social, relegando una vez más a la mujer al ámbito doméstico (Suárez, 2002, p. 20)

Fue el principal apoyo teórico de los movimientos sufragistas de los siglos XIX Y XX. Este tipo de feminismo argumentaba que las mujeres tenían las mismas capacidades que los hombres, solo necesitan eliminar las barreras formales (legales) que las reducían o impedían el acceso autónomo a distintas áreas en la sociedad en la que podrían desarrollarse satisfactoriamente. Es decir, acceso a la educación, el empleo formal y a la política.

b.) Feminismos liberales sociales

Persiguen una igualdad en las oportunidades materiales o reales. Surge como una alternativa para superar las deficiencias del feminismo liberal, ya que el simple reconocimiento formal de parámetros de igualdad no sería suficiente para superar las condiciones reales de desigualdad. Se propone evidenciar que, si bien de manera formal las mujeres pueden participar de manera autónoma en diferentes aspectos dentro de la sociedad, en la práctica siguen existiendo múltiples obstáculos que no garantizan la satisfacción de esta participación. A saber: “(...) las mujeres tienen acceso al empleo, pero están peor remuneradas; tienen jornadas laborales más largas porque no solo deben atender a sus obligaciones frente al trabajo remunerado sino asumir las tareas de cuidado y domésticas; entre otras” (Jaramillo, 2004). El feminismo liberal

social asume el compromiso político de exigir que las mujeres reciban tratamiento especial en lo relacionado con sus funciones de reproducción, particularmente en la protección de la mujer embarazada (licencias de maternidad y lactancia). Es decir, la lucha por la obtención del status de ciudadana libre y autónoma en el ámbito público y a la vez alzar la voz para rescatar la diferencia respecto de los hombres, desde su papel de madres y amas de casa en el ámbito privado.

✓ *El tipo de feminismos que reclama igualdad en cuanto al acceso a los recursos:*

c.) Feminismos socialistas³

Sin abandonar su compromiso con el marxismo, reconocen que el género es una estructura de opresión social. Proponen que el patriarcado y el capitalismo sean vistos como sistemas mutuamente dependientes. Desde esta concepción, solo el capitalismo es el culpable de la situación de opresión y subordinación de la mujer porque fue este sistema económico el que separó a la mujer del trabajo confinándola al ámbito doméstico y familiar. En ese sentido, la opresión es entendida como restricciones impuestas que impiden a los seres humanos desarrollarse. La explotación, como el abuso económico que hacen quienes detentan los medios de producción a quienes carecen de ellos y deben vender su fuerza de trabajo. El capitalismo como forma de explotación es una forma de opresión (aunque no la única) y de ahí que encuentre en el patriarcado el orden y control que requiere dentro de la sociedad.

Feminismo de la diferencia o cultural⁴

En este grupo se ubican las líneas teóricas feministas que se ciñen con la idea de reivindicar y reconocer las diferencias entre hombres y mujeres. Es decir, la mujer desde que nace es formada y sometida culturalmente a ciertos parámetros que construyen una personalidad específica. Por lo tanto, para transformar éstos condicionantes impuestos tradicionalmente por el poder masculino, es necesario abrir una nueva perspectiva de género, una nueva conciencia social (oficializada) que permita alejar el concepto de mujer de las ideas de no-competencia –

³ La autora realiza la aclaración que hay una diferencia importante entre feministas socialistas y socialistas feministas, éstas últimas se adhieren al marxismo pero no reconstruyen ésta línea teórica basadas en la opresión de género. Mientras que las primeras, acogen las fuertes críticas que se realiza al marxismo desde el feminismo para reconstruir a la luz de la opresión de género. (Jaramillo en West, 2004)

⁴ Un importante aporte teórico en esta línea de feminismo es trabajado ampliamente por Simone de Beauvoir: “*No se nace mujer, se llega a serlo*”. La conexión (cultural o material) de la mujer con el otro es la raíz de sus diferencias con el hombre respecto a la forma de conocer, la moralidad, la solidaridad.

en presencia del varón- de miedo al éxito, de la imposición por el cuidado y responsabilidad doméstica, entre otros.

Afirma Suárez que: “La construcción del género, responde a un proceso de interacciones múltiples y auto generativas que representan la adscripción de modelos específicos al hombre y a la mujer” (Suárez, 2002, p.12). De ahí que, se realiza una distinción importante entre lo que se entiende por el sexo y género⁵.

En síntesis, las iniciativas del feminismo cultural afirman según la autora Linda Alcoff que:

... se centran en la creación y el mantenimiento de un entorno saludable –libre de valores que favorezcan lo masculino y de todos sus derivados, como la pornografía- para el desarrollo del principio femenino.” La autora resume la perspectiva de esta línea feminista de la siguiente manera: “(...) la respuesta del feminismo cultural a la pregunta que formulara Simone de Beauvoir, “¿existen las mujeres?”, es afirmativa, y se plasma en la definición de las mujeres fijándose en las actividades que desempeñan y los atributos que poseen en la cultura actual. (Alcoff, 2001, p.13)

Otras líneas teóricas que surgen a partir del feminismo cultural o de la diferencia han intentado: “invertir, subvertir e invalidar algunas estructuras binarias en un análisis de lo local, lo específico y lo particular, desestabilizando incluso la oposición binaria de diferencia e igualdad” (Bartolomei, 2001, p. 187) de lo cual se deriva la construcción de conceptos tales como discriminación interseccional⁶, la cual es explicada por la autora de la siguiente forma:

“Perspectiva conceptual en la teoría feminista, que analiza la interacción simultánea de las discriminaciones y la opresión con base en las identidades múltiples. No equivale a la suma de todas las causas ... sino a la interacción de éstas en cada persona o grupo social, las cuales reflejan las diferentes estructuras de poder existente en la sociedad misma” (Bartolomei, 2001, p.191.)

Por otro lado, el poscolonialismo como línea teórica del feminismo aportaría una perspectiva importante para los países latinos o que en su historia han atravesado procesos de conquista y

⁵ El sexo como un concepto “generalmente usado para hacer alusión a las diferencias biológicas relacionadas con la reproducción y otros rasgos físicos o fisiológicos entre los seres humanos. El sexo como parámetro para crear categorías, distingue entre hombres y mujeres o, en otras palabras, entre machos y hembras de la especie humana” y por el contrario, el género se refiere a “las características que socialmente se atribuyen a las personas de uno y otro sexo. Los atributos de género son, entonces, femeninos o masculinos” (Jaramillo, 2004)

⁶ Este concepto es muy importante a tener en cuenta en el tratamiento de los casos de discriminación o vulneración de los derechos humanos de las mujeres en el contexto colombiano, toda vez, la población se caracteriza por tener una pluralidad de culturas y razas diversas que interactúan entre sí.

colonialismo, toda vez puso en evidencia que las mujeres de estas regiones son “representadas como objeto y no como sujetos de su propia historia y experiencia particulares... vistas siempre como víctimas y no como agentes de su propia historia con experiencias importantes de resistencias y luchas” (Curiel, 2009, p.7) por lo tanto, afirma la autora que se propone desde ésta línea la construcción de “práctica política que considere la imbricación de los sistemas de dominación como el sexismo, racismo y capitalismo” (Curiel, 2009, p.7).

Feminismos radicales

Desde esta línea se acusa a la relación con el otro de la subordinación y la indefensión de la mujer, por lo que se debería promover un régimen de individualización de la misma; allí, ésta tendría la posibilidad de identificarse y de exigirse a sí misma la creación del conocimiento propio o una elevación de conciencia. Así pues, la opresión le es proyectada en cuanto perteneciente al grupo mujer; al respecto, Catherine MacKinnon sostiene que la estructura fundamental de la sociedad es el género, siendo esto lo que determina la distribución del poder. Los hombres tienen el poder y esto se manifiesta en el libre acceso a la sexualidad femenina. En últimas, tienen la posibilidad de definir lo que es ser mujer. (MacKinnon en Jaramillo, 2004, p.7)

Ahora bien, teniendo en cuenta que realizar una presentación extendida de los múltiples matices y perspectivas de análisis de las teorías feministas rebasa las posibilidades de este artículo, me limité a hacer una presentación muy general de los mismos. Acto seguido, se establecerá la relación que encuentra el feminismo con el derecho y de forma específica, cuál (o cuáles) de los tipos descritos hace uso estratégico del derecho como una herramienta para lograr sus propósitos.

Relación Derecho y feminismo: Una aproximación al espacio de transformación.

La relación entre el feminismo y el derecho puede visualizarse desde múltiples perspectivas. Se podrán distinguir principalmente en función de su concepción del derecho: como un instrumento creador, reproductor o perpetuador de la opresión de las mujeres (Lazo, 2013). También se puede afirmar que:

“el feminismo le sirve a la teoría jurídica porque sus movidas analíticas lo ayudan a superar viejos debates: tensión entre formalismo y antiformalismo, entre público y privado (...) las visiones que entienden el derecho como un conjunto de normas

separado de la realidad social, y las que por el contrario lo restauran como creador de la realidad, identidades y relaciones sociales” (Alvear y Jaramillo, 2012, p. 34)

En efecto, una teoría feminista del derecho consiste en dos propuestas, descritas por Robin West de la siguiente manera:

El primer proyecto es el desenmascaramiento y crítica del patriarcado, oculto detrás de un derecho y de una teoría que pretende ser neutral en cuanto al género (...) el segundo, puede ser llamado como << teoría reestructuradora del derecho >> en donde se logre una cantidad considerable de reformas feministas” la meta de ésta teoría debe: “proporcionar descripciones del <<ser humano>>, subyacentes a las reformas legales feministas, que sean fieles a las condiciones de vida de las mujeres (...) solo así, puede ser posible que nuestras construcciones de la teoría del derecho también cambien: (...) dando descripciones fieles de la subjetividad de las mujeres. (West, 2004, p.35)

Ahora, para el interés perseguido en este artículo se analizarán aquellas posturas que perciben el derecho como una herramienta del feminismo o bien, aquellas que como afirma West: “tratan de reconstruir las reformas necesarias para la seguridad y el mejoramiento de las vidas de las mujeres, en un lenguaje directo que sea fiel a nuestra propia experiencia y a nuestras propias vidas subjetivas” (West, 2004, p.36). Más aún si tenemos en cuenta como señala Carol Smart (1989) que el derecho es una estrategia creadora de género. Es decir, así como el derecho –desde una perspectiva masculina- ha creado un sujeto “mujer” completamente alejado de su realidad, podrá ser una “tecnología de género” en la que esta construcción pueda transformarse desde un enfoque feminista. De hecho, el movimiento feminista ha dirigido muchas reivindicaciones hacia el derecho, bien para derogar algunas normas, para exigir igualdad jurídica, o bien para incorporar otras reglas. (Lazo, 2013).

En ese sentido, debemos mencionar que el feminismo liberal clásico como incipiente del movimiento fue el encargado de aunar esfuerzos para la crítica y consecuente modificación de las normas jurídicas que dotaban a hombres y excluían a las mujeres de ciertos derechos⁷. De manera general, se puede evidenciar que lograron transformar las normas jurídicas para proveer formalmente a las mujeres y hombres de iguales derechos.

⁷ A saber, “(...) reglas que preveían el derecho al voto solo para varones, contra las que establecían la potestad marital y contra las restricciones en la educación superior que impedían a las mujeres entrar a las universidades de los hombres, y contra las normas laborales que impedían a las mujeres acceder a ciertos empleos u horarios” (Jaramillo, 2004)

Por su parte, los feminismos liberales sociales y socialistas se enfocaron en exigirle al derecho garantías jurídicas para que las mujeres obtengan los recursos necesarios para alcanzar el ejercicio pleno de su autonomía⁸. Desde este enfoque, también se ha logrado la transformación del derecho en función de estas exigencias.

Ahora bien, con respecto a los feminismos culturales o de la diferencia se observa que hay un cambio en la manera en cómo éstos perciben la transformación del derecho. (Facchi, 2005).

Puesto que, no van a estar de acuerdo con que a las mujeres se les otorgue un espacio en las instituciones y derechos diseñados en principio para los hombres. Proponen el diseño de un esquema de derechos especiales a través de los cuales se reconozcan y valoren el punto de vista y las prácticas particulares de las mujeres (Jaramillo, 2004). También, se ha luchado por modificar los dispositivos culturales que hacen que los derechos conquistados en el terreno formal se traduzcan en un cambio de actitudes y valoraciones hacia lo femenino, y en particular, hacia el cuerpo de las mujeres (CNMH, 2011).

En síntesis, la forma en que las feministas pueden conquistar un equilibrio de poder es a través del derecho y la política. Pese a que, el derecho sea lo que West denomina como utópico y conceptual, así como apologista y político; asimismo: “(...) las teorías feministas deben responder a estas imágenes utópicas; corregirlas, transformarlas, mejorarlas y participar en ellas como imágenes utópicas, no solo como apologías a favor del patriarcado.” (West, 2004, p. 40)

2. Los repertorios de violencia contra la mujer en el conflicto armado colombiano y los estereotipos de género que los promueven.

Como expuse en el capítulo anterior, las mujeres a través de la historia se han organizado para transformar los elementos patriarcales sobre los que están construidas las sociedades y de forma progresiva hacer parte de aquellas decisiones y espacios de las que fueron históricamente apartadas. Aunque no es una lucha acabada, actualmente muchos de esos logros se han materializado con su participación activa en el centro de los debates públicos

⁸ Los importantes logros se manifiestan en el reconocimiento normativo de licencias de maternidad y lactancia, el reconocimiento del valor del trabajo doméstico, la garantía hacia la no discriminación de las mujeres en razón del embarazo, entre otros.

sobre derechos, justicia, democracia y con reclamos cada vez más articulados lograron la consolidación de derechos específicos consagrados en normas jurídicas.

Además, se ha promovido una nueva forma de comprender que dentro de conflictos armados, las mujeres se encuentran en desigualdad y vulnerabilidad diferenciada ya que como lo afirma Laura Segato en su libro *La Guerra contra las Mujeres*, ha habido un cambio histórico en los paradigmas bélicos en los cuales: “(...) la agresión, la dominación y la rapiña sexual ya no son, como fueron anteriormente, complementos de la guerra, daños colaterales, sino que han adquirido centralidad en la estrategia bélica.” (Segato, 2016. Pág. 61). Por lo tanto, este cambio de accionar bélico, llevó a que:

Las violencias de las que eran y son objeto dejaron de ser vistas como eventos casuales y privados cometidos por individuos patológicos, e irrumpieron en el ámbito público para transformarse en delitos punibles asociados a contextos de discriminación más amplios (CNRR – Grupo de Memoria Histórica, 2011. Pág. 18)

De ahí que, se reconoce la guerra como la representación de crueldad excepcional contra las mujeres, oscureciendo las condiciones que en la cotidianidad han llevado a la naturalización de la violencia contra ellas. Este oscurecimiento se produce porque se entiende que los escenarios de guerra representan una profundización de las masculinidades y aumentan las capacidades de control por parte de hombres que se encuentran dotados con armamentos de combate. Así lo ha señalado El Centro Nacional de Memoria Histórica cuando afirma que:

(...) la vida de las mujeres víctimas sobrevivientes transcurre, aun antes de la entrada de los actores armados, en condiciones autoritarias, donde se les niega la voz y decisión, y donde los hombres ejercen su autoridad por medio de métodos violentos. Entonces, así como un actor armado puede con su accionar infringir “las reglas de guerra” en una comunidad, también puede alimentarse de las costumbres y prácticas de discriminación de género legitimadas en la comunidad (CNRR – Grupo de Memoria Histórica, 2011. Pág. 59)

Por esta razón, es necesario entender los fundamentos a partir de los cuales se generaron diversas formas de violencia contra las mujeres en un contexto de conflicto armado, pues debe perseguirse la transformación de esos imaginarios que persisten en la sociedad colombiana. Por consiguiente, este capítulo tiene varios propósitos: Analizar de forma

paralela cuáles fueron los repertorios de violencia ejercidos contra las mujeres en el conflicto armado y comprobar su relación con estereotipos contruidos socialmente sobre el género. Evidenciando que estos roles asignados en razón del sexo se han articulado con las dinámicas propias del conflicto armado, exacerbando el uso de la violencia, reforzando el orden y proliferando discursos que legitiman su ocurrencia como algo natural e inevitable en la vida de las mujeres.

Para comenzar, la cartilla realizada por el CNMH sobre Conceptos y Herramientas para construir una memoria histórica desde la perspectiva de género, define los repertorios de violencia como: “un conjunto de prácticas que los integrantes aprenden y para los cuales desarrollan una serie de disposiciones y destrezas, que luego ejecutan en los campos de batalla” (CNMH, 2011. Pág. 67) Por otro lado, se entiende como una característica de estos que: “(...) se reiteran en el tiempo y siguen un protocolo de actuación más o menos preestablecido (...) por eso pueden ser aprendidos e inculcados mediante entrenamientos militares” (CNMH, 2011. Pág. 67). También, es necesario mencionar que el análisis de estos repertorios de violencia se realiza bajo una perspectiva de género, esta categoría permite dilucidar la distribución desigual del poder entre las mujeres con respecto a los hombres, como consecuencia de construcciones sociales que realizan asignaciones de capacidades y atributos opuestos a personas de acuerdo a su sexo (macho – hembra); valorando estos roles u oficios económica, política y culturalmente unos más imperantes que otros. A partir de allí, se entiende que los repertorios de violencia basados en el género, “se comete contra las personas en razón de su identidad sexual o sus roles de género socialmente contruidos” (CNMH, 2011, Pág. 21)

En la siguiente tabla, se pueden observar de forma paralela las modalidades de violencia que se cometieron en contra de las mujeres en el marco del conflicto armado y aquellos roles o estereotipos con base en el género (femenino) que profundizaron la crueldad con la que se llevaron a cabo estos repertorios.

Tabla 1.

Análisis sobre la relación entre repertorios de violencia y estereotipos de género.

REPERTORIO DE VIOLENCIA			ESTEREOTIPO DE GÉNERO
TRABAJO DOMÉSTICO FORZADO	Modalidades	Definición / Acción	
	Explotación y esclavización para ejercer labores domésticas	Lavado de uniformes, cocinar para las tropas de actores armados, atender los cambuches y casas, entre otras tareas relacionadas	Tradicionalmente se ha considerado que las labores domésticas deben estar relegadas a las mujeres. De ahí que, la responsabilidad de éstas sea la de realizar actividades de mantenimiento, limpieza y orden del hogar o espacios de la esfera privada.
VIOLENCIA DERIVADA DE LA DESINTEGRACIÓN DE REDES DE APOYO	Reclutamiento militar forzado de hijos, esposos y/o compañeros permanentes	Fragmentación de los lazos de unión familiar o de liderazgo comunitario que puedan representar una amenaza de resistencia ante la dominación del actor armado.	Las mujeres son principalmente responsables del cuidado y protección de los miembros de su familia, viven por y para cumplir este objetivo. Por lo tanto, su desintegración implica un derrotero que permite obtener la obediencia, sumisión o manipulación sin mayores resistencias por parte de éstas.
	Asesinato, tortura y/o desaparición forzada de grupos familiares		
VIOLENCIA ECONÓMICA Y/O PATRIMONIAL	Daños en los bienes de las mujeres y su patrimonio	Acciones que afectan la economía y subsistencia de las mujeres además de generar una ruptura emocional con los lugares de vida y trabajo de aquellas.	Históricamente se ha considerado que las mujeres por sí solas no pueden administrar su propia economía y las de sus núcleos familiares. Por lo tanto, cuando no están bajo el cuidado o control de un sujeto masculino son expropiadas de sus bienes o se interfiere en el control de sus ingresos.
	Control de ingresos		
	Desplazamiento y/o despojo forzado de tierras y patrimonio		

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas.

Tabla 1.1

Análisis sobre la relación entre repertorios de violencia y estereotipos de género.

<p>VIOLENCIA DERIVADA DE RELACIONES FAMILIARES O PERSONALES</p>	<p>Matrimonio y/o cohabitación forzada de forma accidental o presunta con integrantes de algún grupo armado</p>	<p>La convivencia de mujeres con actores armados bajo relaciones personales forzadas, limitando y apropiándose de su sexualidad y emociones.</p>	<p>El enamoramiento obligado o las relaciones sentimentales con actores armados representa una fuente de estatus para las familias o implica una imaginada salida económica ante contextos de pobreza, exclusión o discriminación étnica. Ya que, se trasladan las obligaciones de los padres a los esposos o novios quienes podrían apropiarse física, simbólica y sexualmente de las mujeres que eligen como suyas.</p>
<p>VIOLENCIA PSICOLÓGICA</p>	<p>Prácticas humillantes o degradantes de menosprecio a la dignidad humana</p> <p>Comparaciones destructivas</p> <p>Marginalidad social</p> <p>Amenazas realizadas por los actores armados en razón de su identidad de género y orientación sexual</p>	<p>Reproche de la comunidad a las mujeres por apartarse de normas sociales heteronormativas y no cumplir con los roles que se han asignado históricamente.</p>	<p>Las mujeres deben ser juzgadas socialmente por hacer uso deliberado de espacios públicos, tomar decisiones con relación a su sexualidad, salud reproductiva, construir estéticas y prácticas corporales.</p>

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas.

Tabla 2. Análisis sobre el repertorio de violencia sexual y física frente a estereotipos que promovieron sus modalidades.

REPERTORIO DE VIOLENCIA			ESTEREOTIPO DE GÉNERO
VIOLENCIA SEXUAL	Modalidades	Definición / Acción	
	Aborto forzado	Suministro de anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas, entre otras.	Las decisiones sobre la vida reproductiva de la mujer no dependen de su propia voluntad. Se refuerza el imaginario según el cual los grupos armados son espacio para desarrollar masculinidades de forma exclusiva.
	Anticoncepción y esterilización forzada		
	Embarazo forzado, producto de un acto sexual forzado	Obligación de concebir independiente de la voluntad de la mujer en estado de embarazo.	Las mujeres como responsables de la reproducción humana (por ser quienes engendran) no pueden apartarse de este deber por voluntad propia. Se considera una negación directa de esta carga que ha sido concedida por la naturaleza o el mandato divino de la religión (asociación de la mujer como representante de María-madre de Jesús en la tierra)
	Desnudez forzada	Exhibición del cuerpo ante un actor armado, parientes o de la comunidad a la que pertenece. Realización de bailes, ejercicios y desfiles mientras el cuerpo está desnudo.	Forma de juzgar a través de la corporalidad la desobediencia supuesta de las mujeres. Una corrección de sus cuerpos por ser consideradas transgresoras de las normas de feminidad, entre otras: la heterosexualidad, obediencia, monogamia o sumisión al hombre.

VIOLENCIA SEXUAL	Violación sexual	Conducta que ocasiona (por medio de la fuerza, amenaza o coacción) la invasión física de naturaleza sexual en cualquier parte del cuerpo de la mujer con un órgano sexual, objeto u otra parte del cuerpo.	Los cuerpos de las mujeres simbolizan la reproducción de la honra, la dignidad y el poder simbólico del poder masculino. De ahí que, opera como arma de guerra o como territorio a través del cual se conquista, controla y castiga (así como se producen daños físicos y morales) a las comunidades. La violencia sexual ejercida sobre las mujeres también simboliza un bastidor en el que se escribe la derrota y/o victoria del enemigo bélico. Es decir, son considerados botines de guerra.
	Acoso sexual	Comprende contactos físicos innecesarios, comentarios sexualmente sugerentes o agresiones verbales, solicitud de realización de actos sexuales, intentos de violación, gestos obscenos y miradas lascivas.	
	Esclavitud sexual	Vender, cambiar o prestar a las mujeres con el fin de mantener actos sexuales con un actor armado o terceros. No siempre implica el pago de dinero a cambio del acto de esclavitud.	
	Tortura sexual	Exacerba cualquier modalidad de violencia sexual mediante actos tales como: violación masiva, empalamiento, eventración, entre otros.	
	Mutilación de órganos sexuales	Pueden ser: ablación de clítoris, castración, escisión de órganos genitales. Son efectuadas ante mortem o post mortem.	
	Obligación de presenciar o realizar actos sexuales	Pueden ser: la masturbación, tocamientos, entre otros.	

VIOLENCIA SEXUAL	Prostitución forzada.	Obligación de realizar actos de naturaleza sexual en condiciones de explotación y subordinación con una finalidad lucrativa para el actor armado o un tercero.	Los cuerpos de las mujeres que no siguen las normas sociales las cuales imponen la obligatoriedad de tener una vida sexual conservadora, sumisa y monogámica (vinculada a la esfera de una familia tradicional) se reducen a objetos o herramientas que pueden ser utilizados en cualquier momento y de todas las formas por los hombres.
	Cambios forzados en la corporalidad y la performatividad del género	Pueden ser cortes de pelo o cejas, obligación de utilizar ciertas prendas de vestir, entre otras.	Forma de castigo a las mujeres en la que se inserta sus cuerpos en una pedagogía para normalizarlos con base al género femenino, corrigiendo cualquier característica que no se asocie a lo que se considera "apropiado" en una mujer o castigando su desobediencia con la eliminación de aquellas características que las identifican como mujeres.
VIOLENCIA FÍSICA	Sufrir daños o dolores físicos causando lesiones internas o externas	Pueden ser: Heridas, hematomas, quemaduras, empujones, entre otros.	

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas.

Ahora bien, es importante señalar que los estereotipos de género relacionados en la Tabla 1, 1.1 y 2, son construcciones sociales tradicionales arraigadas dentro de la cultura patriarcal en la que los hombres poseen unos privilegios de estatus, poder y masculinidad que les permiten maniobrar y controlar comunidades en su totalidad. En ese sentido, se entiende que las modalidades de violencia descritas se ejercen en tiempos de paz y también en tiempos de guerra. Sin embargo, lo que se pretende demostrar, es que, como lo diría Segato: “No podemos entender la violencia como nos la presentan los medios, es decir, como dispersa, esporádica y anómala. Tenemos que percibir la sistematicidad de esta gigantesca estructura que vincula elementos aparentemente muy distantes de la sociedad” (2016, Pág. 81).

Son elementos culturales que prevalecen y que en un escenario bélico posicionan a las mujeres como: “... cuerpos vulnerables que no están siendo forzados para la entrega de un servicio, sino que hay una estrategia dirigida a algo más central, una pedagogía de la crueldad en torno a la cual gravita todo el edificio del poder” (Segato, 2016, Pág. 81).

También es importante resaltar que distintos repertorios de violencia pueden enlazarse y materializarse de forma conjunta en una misma situación, como lo evidencio a continuación.

En la Tabla 1 se refleja que la obligación de realizar labores domésticas está avalada por pautas de conducta y arreglos de género dentro de la sociedad colombiana. Este rol asignado al género femenino se hace más contundente en condiciones económicas precarias, zonas rurales o periféricas. De ahí que, como lo señala el Consejo Nacional de Política Económica y Social:

Las mujeres rurales enfrentan condiciones sociales y económicas críticas para el desarrollo de sus derechos y atención a sus necesidades fundamentales (...) la división sexual existente relega a las mujeres a desempeñar tareas en las que se considera no se requiere <<la fuerza>>, el mismo nivel de esfuerzo o de capacidad técnica que invierten los hombres. Lo anterior, refuerza patrones de género y la dedicación de las mujeres rurales a labores domésticas o a labores de cuidado sin recibir remuneración alguna... (CONPES 2013, Pág. 29)

En condiciones de guerra, la esclavitud para realizar labores domésticas fue también un escenario para legitimar la violencia sexual sobre las mujeres por parte de actores armados. Al respecto, el Informe Nacional de Violencia Sexual afirma que en escenarios de control territorial por parte de actores armados:

La intersección entre el género –ser mujer- y las labores domésticas asignadas, se tradujo en la cosificación (...) en tanto propiedades de un actor armado utilizadas para cualquier fin. El servicio doméstico se asume extensivo a la disponibilidad sexual de los cuerpos de las mujeres, y por extensión a los de sus hijas, lo que contribuyó a la naturalización de la violencia sexual. Ante la resistencia de las mujeres la respuesta inmediata de los actores armados fue el desplazamiento forzado (CNMH 2017, Pág. 116)

Lo anterior, evidencia que los repertorios de violencia doméstica, económica o patrimonial - generada a causa del desplazamiento forzado- y diferentes modalidades de violencia sexual, precedieron uno a otro tanto en un mismo escenario y como en la mayoría de casos, sobre una misma víctima. De la misma manera, la violencia derivada de la desintegración de redes de apoyo mediante el desaparecimiento o reclutamiento forzado, causó en las mujeres:

...traumas por el hecho violento (asesinato, tortura o desaparición del cónyuge y/o familiares, reclutamiento ilícito de ellas o sus hijos e hijas por parte de actores

armados); la pérdida de sus bienes muebles e inmuebles que implica la ruptura con su cotidianidad; la pérdida de sus referentes sociales, económicos y de su capital social; el nivel de desprotección de niñas y adolescentes huérfanas frente a sus derechos patrimoniales... (CONPES 2013, Pág. 19)

Así mismo, puede observarse que el rol asignado tradicionalmente a la mujer como responsable del cuidado en el ámbito privado trae como consecuencia que, al desintegrarse sus redes de apoyo, deben asumir la función de proveedoras económicas, sin que tengan herramientas o capacidades para enfrentar esta situación. Con frecuencia las mujeres víctimas del desplazamiento forzado están expuestas a “riesgos de explotación doméstica, tratos degradantes, y, en ocasiones, son víctimas de abuso sexual” (CONPES 2013, Pág. 20) Al mismo tiempo que éste ambiente de desprotección en la vida de las mujeres genera un impacto:

... en el desarrollo de su personalidad y la capacidad de agenciar sus propios proyectos de vida, por la exposición a situaciones de desarraigo y carencias materiales. A esta situación se suma la exposición a ser víctimas de abuso físico y emocional en el entorno comunitario... (Ibáñez & Velásquez 2008, Pág. 25)

De otro lado, la discriminación en el ámbito comunitario corresponde a otra forma de violencia expuesta en la Tabla 1, la cual deriva en violencia psicológica hacia las mujeres porque son estigmatizadas al ser víctimas del conflicto armado. Ya que, la comunidad tiende a relacionar a la familia del esposo o hijo desaparecido, reclutado, torturado o asesinado como perteneciente a algún grupo armado ilegal. Así mismo:

Las víctimas muchas veces son rechazadas por sus comunidades, familias y parejas. Cuando el incidente se ha producido en zonas controladas por los grupos armados al margen de la ley, en donde se imponen normas y castigos al transgredir las pautas de comportamiento, la comunidad puede a su vez culpar a la propia víctima por haber transgredido las reglas impuestas y haber padecido un castigo. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doc. 67, Pág. 22, 2006)

Esta desarticulación de las redes de apoyo también afectó directamente a las mujeres que ejercían algún papel de liderazgo comunitario. El grupo armado identificaba dentro del territorio la influencia de estas mujeres líderes y fragmentan los lazos de fraternidad que éstas

habían construido por mucho tiempo. Pese a estas acciones, muchas mujeres continuaban tejiendo redes de apoyo; esto tuvo como efecto que se cometieron “actos aleccionante relacionadas en su mayoría con la violencia sexual hacia las líderes comunitarias o que representaban autoridad para la población, como docentes, médicas, periodistas, entre otras” (CNMH 2017, Pág. 85)

De otro lado, el monopolio de la fuerza, la diferencia de edad, de estatus o de poder adquisitivo, fueron razones por las cuales las mujeres se vieron involucradas en situaciones o relaciones sentimentales forzadas o accidentales con algún actor armado. Además, aquellas razones superan sus capacidades de mantenerse a salvo de esa relación.

El “enamoramiento” lejos de ser una cuestión sentimental, es la expresión de la normalización social que existe en torno a la apropiación física, simbólica y sexual que ejecutan los actores armados sobre las niñas y jóvenes. Muchas veces, este tipo de relaciones representa una fuente de estatus para las familias o porque implica una imaginada salida económica ante contextos de pobreza, exclusión o discriminación étnica. (CNMH 2017, Pág. 126)

Por tal motivo, los familiares de las mujeres y niñas no se oponían a este vínculo sentimental con los actores armados ni tampoco a las diferentes modalidades de violencia que enfrentan al interior de éstas. Pues socialmente hay una idea sobre la potestad ilimitada que tiene un esposo o novio sobre su pareja a nivel psicológico o físico. Es decir, se impulsó con fuerza debido a la existencia de un imaginario patriarcal en el que ellos se proclaman dueños de las vidas y los cuerpos de las mujeres.

De otro lado, los imaginarios existentes sobre las niñas y las adolescentes como cuerpos virginales también son configuradores de una particular condición de vulnerabilidad, al ser los principales objetivos de los actores armados. Ya que, “el arquetipo de la mujer que mantiene su virginidad, mantiene al ideal femenino exento de sexualidad, dócil y puro” (Torres 2018, Pág. 64) y en ese sentido el acceso sexual a estos cuerpos constituye un logro masculino que le otorga su apropiación indefinida. A su vez, la consideración de la virginidad como un valor supremo está tan arraigado en la comunidad, que las niñas y adolescentes que son objeto de apropiación física y emocional por parte de un actor armado genera en ellas sentimientos de frustración por la pérdida de ese valor, considerando ahora su posición como

seres inferiores o disminuidos que deben resistir todo tipo de violencia como castigo por no poseer la virginidad. En este escenario, se hizo posible que las escuelas se convirtieran en un espacio de vitrina para los actores armados y dicho imaginario de patronato sobre las mujeres y niñas las relegó a una temporalidad incierta de disponibilidad permanente.

Ahora, el fenómeno de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en sentido amplio se entiende como todo acto de naturaleza sexual que se realiza contra la voluntad de la víctima. Aunque un acto de violencia sexual no necesariamente incluye violencia física, como lo aclara el Observatorio de Memoria y Conflicto⁹ (en adelante OMC) al afirmar que también existen diversas modalidades de coerción y engaño sobre las personas puestas en estado de indefensión y/o vulnerabilidad, así: “la violencia sexual reduce a las personas a la incapacidad de decidir y de tener autonomía sobre su propio cuerpo, así como, sobre sus derechos sexuales y reproductivos” (CNMH, 2017, Pág. 20). Constituye un ejercicio de poder ejercido de forma violenta a través de la imposición de realizar o presenciar actos sexuales. Es importante señalar que:

La violencia sexual no se considera como una conducta patológica que obedece a la conducta individual, sino a una forma de violencia de género utilizada por los perpetradores para expresar control sobre un territorio o población y sobre el cuerpo del otro como anexo a ese territorio” (Segato 2013, pág. 20)

Desde esta perspectiva, se observa que la violencia sexual fue ampliamente utilizada por los actores armados bajo una racionalidad de masculinidad bélica, la cual mantuvo el control del territorio, el poder sobre sus habitantes y en sí misma fue una estrategia para la economía de la guerra porque para salir vencedores en sus intereses no requerían –en su totalidad– enfrentamientos armados con los enemigos.

Como se evidencia en la Tabla 2, las diferentes formas en que los actores armados han utilizado a las mujeres en un contexto de guerra sugieren que los cuerpos femeninos han sido considerados históricamente como lugares de apropiación, lugares para el ejercicio del poder masculino y de ahí que sean las mujeres las principales víctimas de violencia sexual. Estos

⁹ Durante el año 2018, El Centro Nacional de Memoria Histórica ha reunido diferentes definiciones y conceptualizaciones acerca de la violencia sexual y otros temas relacionados con los fenómenos objeto de estudio en el marco del conflicto armado en Colombia. A través del Observatorio de Memoria y Conflicto se puede evidenciar dicho resultado de síntesis ingresando por medio del siguiente link: <http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/metodologia/definiciones/>

cuerpos no se pueden entender únicamente como realidad biológica o materia, sino como un “producto de diferentes normas y prácticas regulatorias que le dan forma, lo marcan, lo clasifican y le otorgan significado (...) un espacio en el que suceden procesos de construcción de significados, creación y resistencia” (Butler 2007, Pág. 38)

Estas formas se han delimitado por numerosas investigaciones adelantadas por el CNMH en: Violación sexual; acoso sexual; esclavitud sexual; mutilación de órganos sexuales (ablación de clítoris, castración y escisión de órganos genitales); obligación de presenciar o realizar actos sexuales; prostitución forzada; desnudez forzada; esterilización forzada; planificación forzada, aborto o embarazo forzado (éstas últimas entendidas como una restricción de los derechos sexuales o reproductivos). También se entiende que los cambios forzados en la corporalidad y la performatividad del género son una forma de control relacionado con la violencia sexual, según el OMC estos se entienden como:

(...) obligar a una persona o grupo a realizar cambios en su corporalidad o en la expresión de género, en contravía de la construcción de la identidad auto referenciada, con el fin de reafirmar las construcciones de la masculinidad y la feminidad hegemónicas. Por ejemplo: cortes de pelo, obligación de utilizar ciertas prendas de vestir, entre otras. (2018)

En conclusión, las muchas formas de violencia sexual dentro del conflicto armado tenían como función conquistar y controlar a las personas (tanto física y mentalmente) a través de sus cuerpos, enviando un mensaje sobre la posibilidad de ostentar el control absoluto y soberano sobre los territorios y sobre las mismas personas víctimas de estos actos. Michel Foucault (1977) señala que las prácticas de control social del cuerpo, fueron posibles a través de dispositivos de mediación y control, que operan en el lenguaje y se instalan educativamente por medio de las prácticas de socialización.

La perpetuidad y profundización de los diferentes repertorios de violencia de género, fueron posibles en el marco del conflicto armado por imaginarios patriarcales preexistentes en la sociedad colombiana, la cual ha legitimado masculinidades exacerbadas construidas en supuestos de “...fuerza, poder de dominación y uso de la violencia, frente a unas feminidades consideradas frágiles, disponibles y complacientes” (CNMH, Pág. 27). Sobre la continuación de la injusticia social histórica de las mujeres colombianas, Chávez, Cubides, & Vivas afirman que:

El conflicto interno colombiano ha reproducido la injusticia social histórica que vive la mujer en el país; los actores del conflicto armado, incluidas las fuerzas armadas colombianas, han utilizado los canales de discriminación contra la mujer para violar sus derechos e impedir su denuncia. Los crímenes contra la libertad sexual de la mujer han pasado históricamente de una situación de injusticia social a ser un arma de guerra. (2016, p. 104)

De ahí que, la violencia de género contra la mujer significó la instrumentalización del conflicto con fines de mantenimiento del orden impuesto, al tiempo que la búsqueda de precedentes desde los cuales dicha lógica cobró sentido para la comunidad que apoyó o toleró estas formas de violencia.

3. Los instrumentos jurídicos y el Conflicto armado en Colombia: Tratamiento normativo a los temas relacionados con las mujeres en el contexto del conflicto armado.

En Colombia durante el conflicto armado interno no fueron evidentes las dinámicas de violencia que afectaban de forma diferenciada a las mujeres. Esta realidad se hizo visible hasta que la acción persistente de organizaciones de mujeres y de derechos humanos caló en las instituciones estatales para exponer de manera clara y legítima cómo existen varios factores de riesgo y vulnerabilidad que de manera particular afectan a esta población permitiendo que:

Las mujeres sean víctimas de múltiples y particulares formas de violencia que se enmascaran a través de designaciones de roles que las subyugan a labores domésticas, de servicio, de cuidado, tiempo, necesidades y ejercicio pleno y autónomo de su libertad en todas las esferas. (Documento Conpes 3784, 2013, p. 20)

En ese sentido, los instrumentos jurídicos son un fragmento de lo que nos sucede como sociedad. Por lo tanto, prescriben la forma en la que se debe actuar para evitar que las mujeres no solo carguen con las vejaciones y las estigmatizaciones que les ha dejado el conflicto armado colombiano. Sino que, además deben impedir que sigan llevando sobre sus hombros los estereotipos de género que promueven la reproducción de éstas crueles e infames formas en que los grupos armados permanecieron ensañados sobre aquellas

Las situaciones preexistentes de exclusión, estigmatización y discriminación hacia las

mujeres, se exacerban en espacios en donde predomina el conflicto armado de ahí la necesidad que el Estado adopte un enfoque diferencial, de género, de derecho y de equidad en lo relativo al: “Diseño e implementación de políticas de prevención, atención asistencia y reparación integral en el marco del conflicto interno armado, de acuerdo con las consecuencias desproporcionadas que esto ha significado y generado en el país” (Documento Conpes 3784, 2013, p. 30).

El marco jurídico que fue expedido en el proceso de negociación, desmovilización y reinserción de los paramilitares indica la manera en cómo de manera incipiente fueron tratadas las víctimas, y en específico las mujeres víctimas, así como los obstáculos a los que se vieron enfrentadas por parte de las herramientas jurídicas que implementó el Estado. La expedición de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, no estableció pautas claras en materia del tratamiento a mujeres víctimas de grupos armados al margen de la Ley, más allá de lo establecido en el Artículo 41 “Atención a necesidades especiales. Tanto los órganos judiciales como las entidades de apoyo técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres ... que participen en el proceso” (Congreso de la República, Ley 975, 2005) y la necesidad de incluir mínimo dos mujeres en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Congreso de la República, Ley 975, 2005, Art.50), encargada de entre otros, garantizar la participación de las víctimas en procesos de esclarecimiento judicial y realización de sus derechos.

Sin embargo, las condiciones diferenciadas a las que mujeres víctimas se enfrentaban antes, durante y después del conflicto armado no fueron reconocidas con mayor especificidad hasta que la Corte Constitucional colombiana en el año 2008 cuando profiere el Auto 092 como consecuencia del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en relación con el fenómeno del desplazamiento forzado en la sentencia T 025 del 2004, es decir: “Se reconoce que en el país hay una violación masiva y repetitiva de los derechos humanos de la población desplazada y que las fallas estructurales de las políticas del Estado contribuyen a que ello suceda” (Women’s Link, Observatorio de género y justicia, 2009).

La Corte afirma que no existían garantías para los derechos humanos de las víctimas que

estaban reconocidas y protegidas en la Ley 387 de 1997: “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”, toda vez el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada no estaba cumpliendo sus obligaciones (Comisión Colombiana de Juristas -CCJ-, 2007, p. 10). Es importante resaltar que, este Sistema Nacional mencionaba dentro de sus objetivos que se debía: “prestar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos” (Congreso de la República, Ley 387, 1997, Art. 10) así como la prelación dentro de los programas diseñados por la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer (Congreso de la República, Ley 387, 1997, Art. 19).

Pese a ello y según lo manifestado por la Corte Constitucional el impacto desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado en las mujeres era invisible sobre todo en el nivel oficial, debido a la falta de políticas públicas específicas que respondieran a los impactos agudizados del conflicto y del desplazamiento, la ausencia de medidas que evaluaran y describieran los distintos tipos de violencia que debían enfrentar las mujeres en el marco del conflicto armado. Así, la Corte afirma que:

“...el Estado colombiano está en la obligación constitucional e internacional de resolver de forma ágil, decidida, acelerada y efectiva las numerosas fallas y vacíos en la respuesta oficial a la situación de las mujeres frente al desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, reconociendo y respondiendo al impacto diferencial y desproporcionado que éste surte sobre el ejercicio de los derechos fundamentales más básicos, así como las posibilidades diferentes que tiene para reconstruir sus proyectos de vida una vez se ha causado el desplazamiento. (Corte Constitucional de Colombia, Auto 092 de 2008, p. 14)

Este presupuesto fáctico que reconoce la Corte en el Auto 092 implicó la adopción de medidas para la protección efectiva de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado, las cuales consistieron en:

1. Ordenar la creación de trece programas para suplir los vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres. Dentro de los cuales

2. Adopción de órdenes individuales y concretas para seiscientas (600) mujeres desplazadas del país.
3. Comunicado al Fiscal General de la Nación de ciento ochenta y tres (183) crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado.

Este Auto marca un hito histórico en el marco normativo colombiano según Bermeo Mantilla, porque llenó de un significado jurídico específico el enfoque diferencial llamado de “género” (Bermeo, 2011) y a su vez tres aspectos fundamentales para el avance en la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas, a saber:

1. El reconocimiento de las mujeres con derechos políticos, víctimas y sujetos de derechos, las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres que la sociedad tolera y reproduce.
2. El reconocimiento de prácticas de violencia sistemática contra las mujeres en el marco del conflicto armado.
3. La validación de la importancia de la democracia y los mecanismos de control y división del poder (...) el fallo es un llamado para que las mujeres reconsideren la importancia de su participación social y política, su cualificación organizativa y la valoración de la democracia participativa como uno de los escenarios posibles para generar transformaciones esenciales en la toma de decisiones, así como de las graves implicaciones que tienen para ellas la inclusión de formas autoritarias de ejercicio del poder en una sociedad patriarcal que las oprime y las subordina, dominándolas en sus cuerpos y en sus vidas. (Bermeo, 2011, p.12)

La Ley 1257 expedida en el año 2008, está encaminada a la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. En cuanto a la sensibilización, la Ley en el Capítulo IV dispone:

1. Formular estrategias con programas de formación, difusión, prevención, protección y atención en todos los aspectos para la erradicación la violencia contra las mujeres.
2. Fortalecer las instituciones nacionales que atienden a mujeres víctimas de violencia en las zonas geográficas
3. Proteger a la mujer en situaciones de desplazamiento frente a los actos de violencia en las regiones.
4. Adoptar medidas para investigar o sancionar a los miembros de la policía, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y otras fuerzas que realicen actos de violencia contra

las mujeres, que se encuentran en situaciones de conflicto, por la presencia de actores armados.

También responsabilizó a cuatro ministerios para que, a través de ellos, se cumpla con el objeto de la Ley. Así estableció las siguientes medidas:

- El Ministerio de Educación desarrollará políticas y programas que contribuyan a sensibilizar a la sociedad para no seguir hechos de violencia con el género.
- El Ministerio de la Protección social, promoverá, desarrollará y reconocerá que las mujeres tienen igual derechos laborales, difundiendo campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.
- El Ministerio de Comunicaciones elaborará programas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, a garantizar el respeto a la dignidad de la mujer y a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, evitando toda discriminación contra ellas.
- El Ministerio de la Protección Social, elaborará o actualizará los protocolos y guías de actuación de las instituciones de salud y de su personal ante los casos de violencia contra las mujeres. Permitirá que el Plan Obligatorio de Salud incluya las actividades de atención a las víctimas que corresponda en aplicación de la presente ley.

En el 2011 el Congreso aprobó la Ley 1448, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta norma pretendió ofrecer mecanismos e instituciones para identificar y reparar todos los daños derivados de los “hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Congreso de la República, 2011).

Es una de las Leyes que marcó un avance importante en el tratamiento específico de la violencia contra las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, la cual tiene por objeto:

“...establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se

dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales” (Congreso de la República, Ley 1448, 2011)

En materia de consideraciones favorables para las mujeres se evidencia que la Ley contempla dentro de sus principios rectores, la igualdad, todas las medidas que regula: “serán reconocidas sin distinción de género o, respetando la libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica” (Art. 6). También incluye el enfoque diferencial, reconociendo que:

Hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque. El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley tales como mujeres... (Congreso de la República, Ley 1448, 2011, Art. 13)

Además, la Ley garantiza la inclusión de las mujeres en las Mesas de Participación de Víctimas, reconociéndolas como colectivo de víctimas que podrá participar de forma activa en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política a nivel nacional, departamental, municipal y distrital (Congreso de la República, Ley 1448, Art. 193)

Por otro lado, en materia de salud señala medidas específicas para mujeres que han sido víctimas del conflicto armado tales como el reconocimiento y pago de servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria (Art. 54), ordenando, entre otros:

“Examen del VIH sida y de ETS, en los casos en que la persona haya sido víctima de acceso carnal violento.” (Congreso de la República, Ley 1448, 2011, Art. 54, Núm. 7), “Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y/o la ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima.” (Congreso de la República, Ley 1448, 2011, Art. 54, Núm. 8), “La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.” (Congreso de la República, Ley 1448, 2011, Art. 54, Núm. 9).

Así como un Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, que debe contar con un componente de atención de mujeres víctimas e incluir atención individual, familiar y comunitaria, por parte de profesionales con formación técnica específica y experiencia relacionada, para casos de violencia sexual (Congreso de la República, Ley 1448, 2011, Art. 137, Núm. 2)

En materia de educación, la Ley regula concretamente el tema de acceso a la educación en su Artículo 51 cuando dispone lo siguiente:

Las distintas autoridades educativas adoptarán, en el ejercicio de sus competencias respectivas, las medidas necesarias para asegurar el acceso y la exención de todo tipo de costos académicos en los establecimientos educativos oficiales en los niveles de preescolar, básica y media a las víctimas señaladas en la presente ley, siempre y cuando estas no cuenten con los recursos para su pago. De no ser posible el acceso al sector oficial, se podrá contratar el servicio educativo con instituciones privadas. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional incluirá a las víctimas de que trata la presente ley, dentro de las estrategias de atención a la población diversa y adelantará las gestiones para que sean incluidas dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del ICETEX. Dentro de los cupos habilitados y que se habilitaren para la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se priorizará, facilitará y garantizará el acceso a las víctimas de que trata la presente ley (Congreso de la República, Ley 1448, 2011, Art. 51)

Así mismo, la Ley implementó la creación de un Centro de Memoria Histórica, al cual encarga específicamente que: “las actividades de memoria histórica harán especial énfasis sobre las modalidades de violencia contra la mujer” (Congreso de la República, Ley 1448, 2011, Art. 145, párrafo). Respecto a las garantías de no repetición, se resaltan las medidas expresas en el literal d, h y s, respectivamente:

d.) La prevención de violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, para lo cual, ofrecerá especiales medidas de prevención a los grupos expuestos a mayor riesgo como mujeres (...) que propendan superar estereotipos que favorecen la

discriminación, en especial contra la mujer y la violencia contra ella en el marco del conflicto armado;

h). Diseño de una estrategia única de capacitación y pedagogía en materia de respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que incluya un enfoque diferencial, dirigido a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, así como a los miembros de la Fuerza Pública. La estrategia incluirá una política de tolerancia cero a la violencia sexual en las entidades del Estado;

s.) Formulación de campañas nacionales de prevención y reprobación de la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, por los hechos ocurridos en el marco de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley. (Congreso de la República, Ley 1448, 2011, Artículo 149) (subrayado fuera del texto original)

Acerca del Registro Único de Víctimas ordena que será la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la responsable del funcionamiento del Registro Único de Víctimas. Asimismo, indica que:

Las víctimas deberán presentar una declaración ante el Ministerio Público en un término de cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de la presente ley para quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la vigencia de la ley (Congreso de la República, Ley 1448, 2011, Art. 155)

Sobre el particular, el Decreto 4800 de 2011 desarrolla el procedimiento de inscripción en el Registro Único de Víctimas indicando que la condición de víctima es una situación fáctica que no está supeditada a un reconocimiento oficial a través del registro, sin embargo:

“es condición necesaria para acceder a las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley de Víctimas ... aunque la inscripción no es necesaria para acceder a las medidas de ayuda humanitaria y atención de emergencia en salud, de las cuales podrás beneficiarse las víctimas desde el momento mismo de la victimización” (Humanas, 2011, p. 9)

La Ley contempla una ruta de reparación por vía administrativa¹⁰ que consiste en una indemnización, además de medidas de rehabilitación enfocadas a la atención psicosocial de las

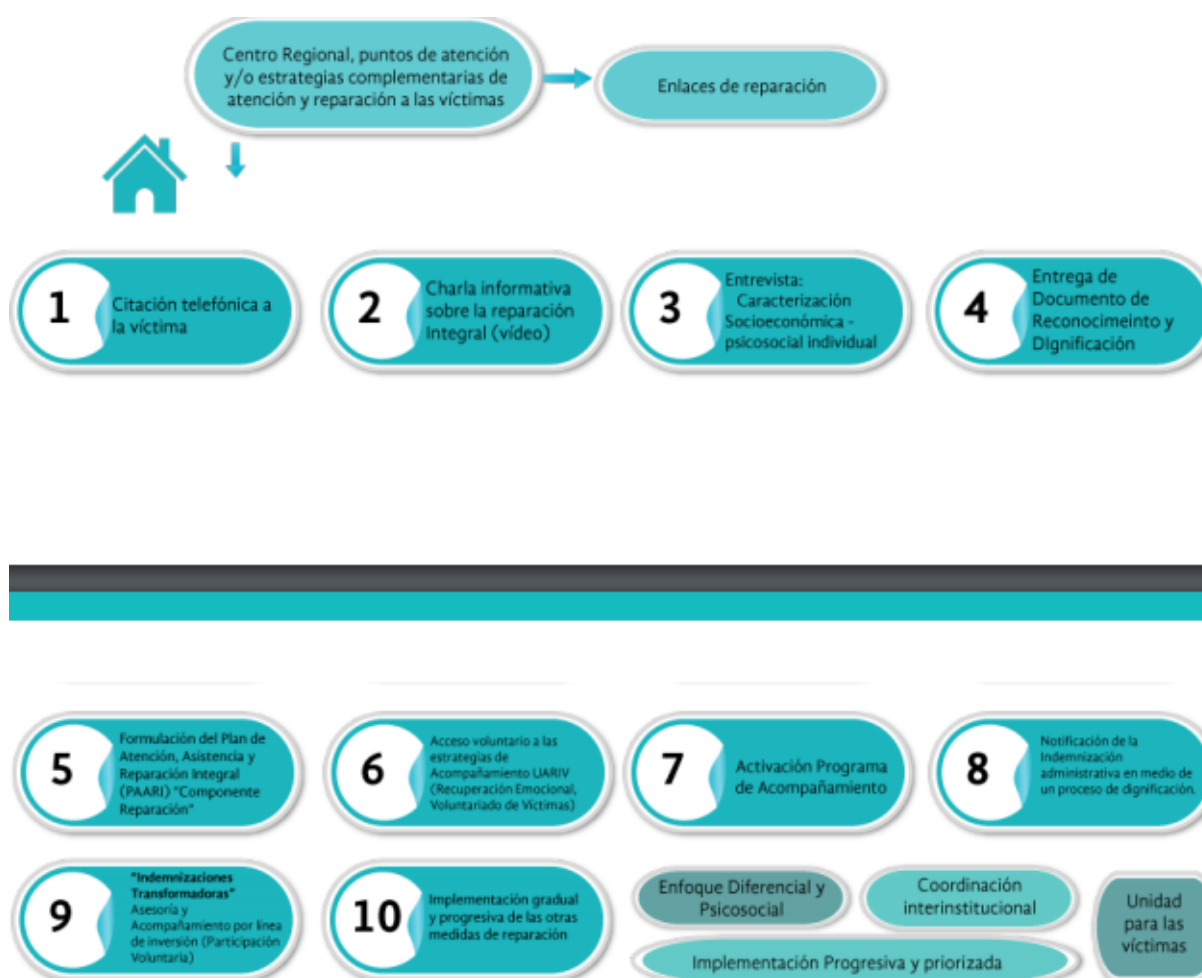
¹⁰ Previo a la promulgación de la Ley 1148 de 2011, el Decreto 1290 de 2008 regulaba la reparación individual por vía administrativa, sin embargo, fue derogado por el Decreto 4800 de 2011, salvo para efectos de lo dispuesto en el artículo 155 del mismo que trata acerca de las solicitudes de indemnización por vía administrativa formuladas antes de la entrada en vigencia de la Ley 1148, caso para el cual se tratará con el Decreto que la antecede.

víctimas, satisfacción dirigidas al restablecimiento de las víctimas al goce efectivo de sus derechos, y garantías de no repetición para evitar que los hechos de violencia sigan ocurriendo.

De ahí que, la Reparación Individual se entiende dentro de la Ley 1448 de 2011 como:

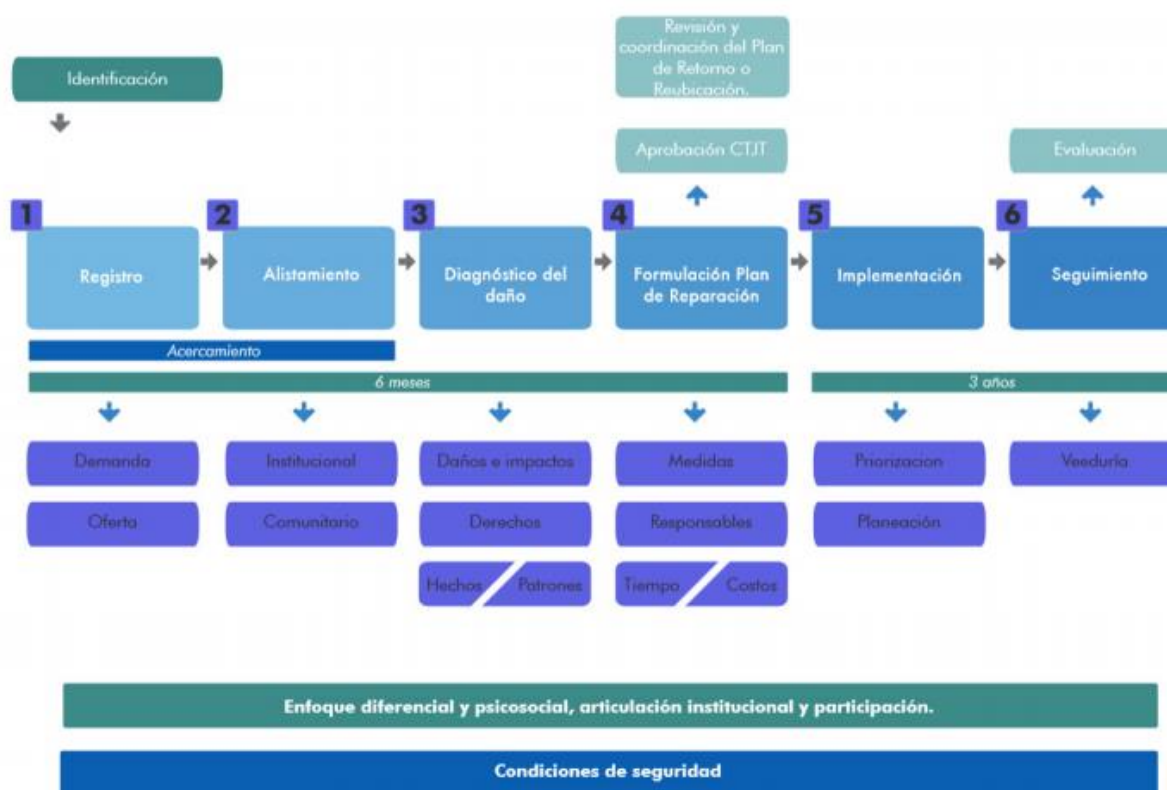
“...aquellas medidas que tiene en cuenta las necesidades, intereses específicos y características especiales de las víctimas en razón de su edad, género, orientación sexual o condición de discapacidad que presenten; a través de atención, asesoría y acompañamiento integral, adecuado, diferencial y psicosocial orientado a la transformación del proyecto de vida y a la inversión adecuada de los recursos recibidos a título de indemnización administrativa” (Consejería Presidencial para la Equidad para la Mujer, 2012)

La Ruta de Asistencia para este tipo de reparación se describe en el siguiente cuadro:



Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2012). Cartilla para Jueces de Restitución de Tierras.

Así como una Ruta de Reparación Colectiva de Grupos y Organizaciones de mujeres, que comprenden: “el conjunto de medidas de restitución indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición a que tienen derecho las comunidades y organizaciones o grupos sociales y políticos, en términos políticos, materiales y simbólicos” (Consejería Presidencial para la Equidad para la Mujer, 2012) como se describe en el siguiente cuadro:



Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2012). Cartilla para Jueces de Restitución de Tierras.

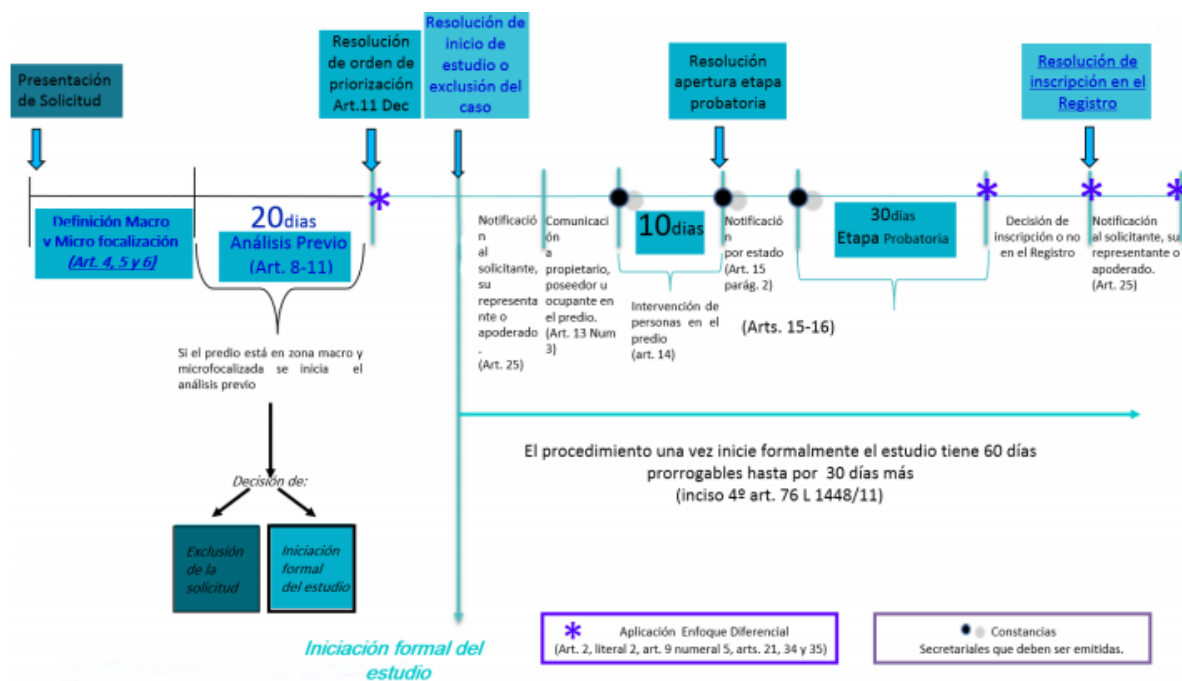
Por otro lado, la Ley señala la Ruta para mujeres víctimas del conflicto armado que han sido despojadas de sus propiedades, es decir:

...la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia. (Congreso de la República, Ley 1448, 2011, Art. 74)

O aquellas que han tenido que abandonar el lugar donde residen de manera forzada. Este hecho lo define la Ley como:

...la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75 (Congreso de la República, Ley 1448, 2011, Art. 74)

En el siguiente cuadro se grafica el procedimiento administrativo establecido para la restitución de tierras, evidenciando la aplicación de un enfoque diferencial¹¹ en la atención priorizada a este grupo poblacional:



Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Unidad de Restitución de Tierras.

De manera que, la Ley 1448 de 2011 hace un importante reconocimiento en el despojo de tierras como un hecho que victimiza a mujeres de forma diferenciada, por tanto, la restitución de las mismas es un componente importante de reparación. Esto se evidencia de manera puntual en el Artículo 114 cuando ordena lo siguiente:

Las mujeres víctimas de despojo o abandono forzado, gozarán de especial protección del Estado en los trámites administrativos y judiciales relacionados en esta ley. Para ello

¹¹ Este enfoque fue reglamentado en el Decreto 4829 de 2011 el cual establece que: “La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas atenderá de manera preferencial a las personas a que se refieren los artículos 13 y 114 y 115 de la Ley 1448 de 2011.” (Art. 2)

la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas dispondrá de un programa especial para garantizar el acceso de las mujeres a los procedimientos contemplados para la restitución, mediante ventanillas de atención preferencial, personal capacitado en temas de género, medidas para favorecer el acceso de las organizaciones o redes de mujeres a procesos de reparación, así como de áreas de atención a los niños, niñas y adolescentes y discapacitados que conformen su grupo familiar, entre otras medidas que se consideren pertinentes.

La tramitación de las solicitudes de mujeres despojadas cabezas de familia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas se atenderá con prelación sobre las demás solicitudes. (Congreso de la República, Ley 1448, 2011, Art. 114)

Así mismo, cuando el proceso de restitución se lleve a cabo la Ley 1448 de 2011 ordena que deben existir garantías por medio de:

- La entrega oportuna del predio y las condiciones de seguridad que permitan el usufructo del mismo. Los encargados de satisfacer esta medida serán las autoridades de policía o militares (Art. 116).
- Las mujeres tendrán prioridad en materia de crédito, adjudicación de tierras, garantías, seguridad social, educación, capacitación y recreación, subsidio familiar, planes y programas de reforestación y jornadas de cedulaación. (Artículo 117)
- La decisión judicial que ordena la restitución deberá ser dictada en favor del cónyuge o compañera o compañero permanente, cuando en su conjunto hubieran sido víctimas de abandono forzado y/o despojo del bien inmueble. La compensación se efectuará en favor de los dos y el registro de la propiedad deberá ocurrir de la misma forma aun cuando alguno de los dos no comparezca al proceso (Artículo 118)

En cuanto al acceso a la justicia por parte de mujeres que han sido víctimas, esta Ley es clara para las autoridades que intervienen en los procesos penales de delitos contra la libertad, la integridad y formación sexual. Las cuales: “...deberán brindar garantías de información reforzadas, mediante personal especializado en atención psicosocial, sobre las instituciones a las que deben dirigirse para obtener asistencia médica y psicológica especializada, así como frente a sus derechos y la ruta jurídica que debe seguir” (Congreso de la República, Ley 1448,

2011, Art. 35, parágrafo 1)

Por otra parte, establece que la Fiscalía General de la Nación debe crear un Protocolo para la investigación de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales:

“en el que se contemplen medidas jurídicas y psicosociales y aspectos como el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios para la investigación, el trato, la atención y la asistencia a las víctimas durante todas las etapas del procedimiento, y acciones específicas para la atención de las mujeres...” (Congreso de la República, Ley 1448, 2011, Art. 38, parágrafo)

Ahora bien, el Auto 098 de 2013 hace un seguimiento al Auto 092 de 2005, identifica el contexto de riesgo al que se enfrentan las mujeres que son líderes o activistas sociales, que promocionan o defienden los derechos humanos dentro de las comunidades. Esta providencia define el marco jurídico constitucional que protege a esta población, obligando al Estado a:

Garantizar la promoción de la defensa de los derechos humanos, la prevención de violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos, la protección ante los riesgos contra su vida, integridad personal y seguridad personal, la atención adecuada y la garantía del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en los casos en que los riesgos se concretan en actos de violencia” (Corte Constitucional de Colombia, Auto 098 de 2013, p. 8)

El Auto 009 de 2015 también realiza un seguimiento al Auto 092 de 2008 y la Sentencia T 025 de 2005 e identifica nuevos riesgos a los cuales se enfrentan las mujeres en medio del conflicto, además de hacer un llamado en la persistencia de la violencia sexual contra esta población y sobre los casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación, y a la creación e implementación de un programa de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas.

La Ley 2014 “Por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado” es complemento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la Ley 1257 de 2008, e

introduce reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal con el objetivo de:

...introducir nuevos tipos penales relativos a delitos considerados por el derecho penal internacional como de carácter sexual en el contexto del conflicto armado (como la esterilización forzada, embarazo forzado y desnudez forzada) o aumentar la pena para algunos que ya estaban tipificados (como la prostitución forzada), y en el segundo caso, garantizar a las víctimas el derecho a la justicia que reclaman, tomando medidas frente a la impunidad y la reparación. (CERAC, 2014)

Es un avance normativo importante por cuanto se ajusta a estándares internacionales, toda vez prescribe que: “Se entenderá como crimen de lesa humanidad los actos de violencia sexual cuando se comentan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil...” (Congreso de la República, Ley 1719, 2014, Art. 15) y otorga el carácter de imprescriptibles por treinta (30) años aquellos delitos que con el marco jurídico penal ordinario quedarían archivados por falta de acervo probatorio (Art. 16). Así mismo, se evidencia un importante avance respecto a los dos enfoques que menciona Barragán (2016) bajo los cuales el tratamiento por parte del Derecho pueda ser eficaz en la atención integral a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, estos son: La creación de políticas públicas y de un área especializada en delitos sexuales. Respecto a ésta última área afirma Hernández que:

“La FGN implementó la estrategia interinstitucional de lucha contra la impunidad en materia de violencia sexual, mediante la cual se realizan visitas a terreno donde se identifican los nudos de acceso a la justicia de las mujeres y se implementan acciones intersectoriales para la atención integral a mujeres y niñas” (2016, p.31)

Por último, en el siguiente apartado abordaré la incidencia que han tenido las organizaciones de mujeres en el marco normativo e instrumentos jurídicos creados para la atención de problemáticas y fenómenos a los que se enfrentan las víctimas que han sufrido diferentes repertorios de violencia, en el marco de negociaciones de Paz entre actores armados y el Estado colombiano. Pues es significativo el uso de herramientas jurídicas y del cabildeo por parte de movimientos de base y organizaciones políticas de mujeres para la incidencia y participación en estos espacios de negociación, a su vez este hecho representa una puerta abierta para la continua transformación de estereotipos de género por medio de los instrumentos jurídicos que proponen la salida a un conflicto armado en el marco de justicia transicional y la etapa de postconflicto.

En los Acuerdos de Negociación entre el presidente Belisario Betancur y movimientos guerrilleros en la década de los ochenta, indica Velásquez que se marca un precedente pues por primera vez incluyen mujeres en las mesas de negociación (Velásquez en Chaparro y Martínez, 2016). Aunque su participación dentro de las mesas de negociación para la época continuaba siendo baja, se resalta el hecho que:

Las feministas plantearon sus reclamos y comenzaron a formar agendas para incidir en las negociaciones y, aunque estas iniciativas no se vieron concretadas en los acuerdos, en esta época empiezan a movilizarse los recursos y las estrategias que las organizaciones feministas desarrollarán en el futuro. (Chaparro y Martínez, 2016, p. 26)

Los reclamos de las mujeres de la época no estaban propiamente marcados en un enfoque de género, sino que iban dirigidas a reclamos dirigidos a la garantía de los derechos de las mujeres y su calidad de vida, así como de sus núcleos familiares. Afirma Chaparro y Martínez que la categoría de género “empieza a aparecer como una categoría clave del discurso y las prácticas feministas” (2016, p. 27) con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

No obstante, existía una debilidad manifiesta en el Estado con respecto a implementar diversos temas en materia de género, toda vez permanecía una “debilidad manifiesta en la Consejería y la poca importancia que las agendas gubernamentales le asignaban a los temas de género” (Wills en Chaparro y Martínez, 2016, p. 38), la importancia de ésta etapa de acuerdos de paz radica en la concentración y coordinación entre las organizaciones de mujeres para incidir de forma directa en el “pacto de paz” que proponía la creación de una Asamblea Nacional Constituyente. Además, “lograron un éxito rotundo frente a los derechos políticos, al conquistar la garantía a la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública” (Wills en Chaparro y Martínez, 2016, p.41). Este logro sería más evidente en los gobiernos posteriores a la Constitución del 91, pues las organizaciones de mujeres cambiaron la forma en cómo veían su interlocución con el Estado, ya no de forma opuesta sino de necesidad de cooperación en doble vía. En consecuencia:

El Gobierno de Samper se recuerda como una etapa en la que las reclamaciones y demandas de las feministas comenzaron a resonar en la institucionalidad colombiana y se abrieron canales de comunicación entre el movimiento y el Estado, los cuales, a pesar de estar cargados de tensiones, fueron un precedente para las formas que

adoptaría la incidencia del movimiento en los procesos de paz y las rutas que tomaría el Estado en esta materia (Chaparro y Martínez, 2016, p. 44)

Este gobierno también es importante toda vez se creó la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres con la Ley 188 de 1995, en el año 1999 bajo el Decreto 1182 se transforma en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y, por último, en 2010 es ratificada por Juan Manuel Santos Calderón como Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM)¹². Es importante resaltar que la creación de una Entidad encargada específicamente de la consolidación de las políticas de género y proyectos de larga duración que tuvieran como foco central las situaciones que afectan a las mujeres, fue posible gracias a “una alianza estratégica que se entabló entre la entonces senadora Piedad Córdoba y las organizaciones feministas” y que, para las autoras Chaparro y Martínez significaba “la posibilidad de desarrollar proyectos de larga duración y con las garantías para que o se acabaran por cuenta de voluntades políticas particulares” (2016, p. 44).

Gracias a la creación de esta Entidad y a los compromisos internacionales¹³ a los cuales Colombia se vincula, las acciones encaminadas a poner fin a la guerra y a los efectos que tiene sobre las vidas de las mujeres adquirieron mayor relevancia.

Bajo el Gobierno de Andrés Pastrana (1988-2002) se estableció la mesa de diálogo para la paz entre el gobierno y las FARC en la zona de San Vicente del Caguán. Durante éste proceso afirma Gloria Tobón que en todos los documentos que hacían parte de la negociación: “se empezó a incorporar [el enfoque de género], eso ya no volvió a desaparecer en la agenda, nada se hacía sin que estuvieran las mujeres y nosotras estábamos ahí pendientes de eso” (Tobón en Chaparro y Martínez, 2016, p. 54) entonces, se constata que éstos diálogos de

¹² Rescatado de: Antecedentes Institucionales Consejería Equidad de la Mujer: www.equidadmujer.gov.co

¹³ Afirman las autoras que: “La ONU declaró el periodo de 1975 a 1985 como la Década Internacional de la Mujer, posicionando así el problema de la equidad de género en el centro de las políticas públicas y de las preocupaciones para lograr el desarrollo de los países. En este escenario, en 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw), tratado internacional que compromete a los Estados miembros a emprender programas, políticas y legislaciones que contribuyan a disminuir la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres. Colombia se vinculó como Estado parte de la Cedaw por medio de la Ley 051 de 1981. En este mismo sentido, a través de la Ley 248 de 1995, el país se unió a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Convención de Belém do Pará”. A lo largo de la década de la mujer, también se realizaron cuatro conferencias internacionales con delegados de diversas regiones en las que el objetivo central era realizar un diagnóstico de cómo estaban los países en materia de equidad de género y cuáles eran los mecanismos más adecuados para solucionar los problemas en ese ámbito. La Conferencia de Beijing, llevada a cabo en 1995, sintetizó todas estas preocupaciones en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, a la cual se adscribieron 189 países, entre ellos Colombia.” (Chaparro y Martínez, 2016, p. 46)

caracterizaron por “una movilización del feminismo y sus redes de participación en aras de incidir en los temas claves de la agenda de paz” (Chaparro y Martínez, 2016, p. 60)

Con el gobierno presidencial de Álvaro Uribe, la incidencia de los movimientos de mujeres se aparta del Estado pues los canales de cooperación se rompen, de forma autónoma se organizan para construir “los primeros informes del efecto desproporcionado del conflicto armado y a desarrollar cada vez más conceptualizaciones de los que significa el desplazamiento para las mujeres” (Bazarra en Chaparro y Martínez, 2016, p. 61). Durante esta incidencia, los movimientos de mujeres y sus denuncias recibieron por parte del Gobierno estigmatización y desinterés, pero ésta fue la razón por la cual: “comienzan a apropiarse y apersonarse de los instrumentos internacionales para posicionar sus agendas y presionar al Estado en el cumplimiento de sus compromisos con el enfoque de género” (Chaparro y Martínez, 2016, p. 62). Un resultado de esto es la expedición de la Resolución 1325 del 2000 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas¹⁴, la cual:

estableció un marco jurídico y político histórico, reconoce la importancia de la participación de las mujeres, así como de la inclusión de la perspectiva de género en las negociaciones de paz, la planificación humanitaria, las operaciones de mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz en las situaciones posteriores a un conflicto y la gobernanza. (ONU mujeres, 2000)

Y la cual sería una herramienta jurídica importante para las negociaciones posteriores entre actores armados y el gobierno. En tanto, el gobierno de Uribe llegó a Acuerdos con el grupo Autodefensas Armadas de Colombia (AUC) los cuales: “se preocupan por devolverle legitimidad al Estado en las zonas ocupadas por estos actores armados, además de garantizar condiciones de cese al fuego y de eliminación del narcotráfico. La perspectiva de género no aparece” (Chaparro y Martínez, 2016, p. 63).

Ahora bien, bajo el gobierno presidencial de Juan Manuel Santos se estableció una mesa de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC y se firmó el Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en el

¹⁴ El pasado octubre del 2017 se conmemoró los 17 años de la adopción de esta Resolución por parte de Colombia, la Misión de Verificación de la ONU afirmó que: Reconoce y valora la participación activa y significativa de las mujeres en Colombia para la construcción de la paz. El Acuerdo Final para la terminación del conflicto entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP ha sido reconocido en el mundo como ejemplo de un proceso de paz con un enfoque de género, al incorporar la participación de negociadoras plenipotenciarias, las asesoras expertas en temas de género y derechos de las mujeres, y la creación de la Subcomisión de Género en la Mesa de Conversaciones de La Habana. (Rescatado de: <https://colombia.unmissions.org>)

año 2016. Es el primer Acuerdo en lograr una integración efectiva del enfoque de género y las organizaciones de mujeres realizaron importantes aportes:

para el discernimiento de los efectos diferenciados y desproporcionados del conflicto armado en la vida de las mujeres ... Se hicieron llegar a la Mesa de Conversaciones importantes tesis sobre los orígenes del conflicto colombiano anclados en las estructuras de desigualdad de género tradicionales en la sociedad y que fueron acentuadas por la guerra. Asimismo, se argumentó sobre la necesidad de transformar la inequidad y la discriminación de género para lograr la construcción de una paz sostenible en Colombia. (GPaz, 2018, p. 10)

El Género en la Paz -GPaz, explica que la forma en que fue incorporado el enfoque dentro del Acuerdo es de la siguiente forma:

- La inclusión de medidas afirmativas para la promoción de la igualdad de género;
- El establecimiento del carácter perentorio de la participación activa de las mujeres y de sus organizaciones en la construcción de la paz
- El reconocimiento de la victimización diferenciada y desproporcionada a causa del conflicto armado.

Asimismo, La Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujeres y el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – Humanas, identificaron 122 medidas de género¹⁵ que fueron incluidas en los puntos acordados en las mesas de negociación. En materia de Acceso y uso de tierras, la formalización de la propiedad, en materia de participación política, en materia de garantías de no repetición y fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que garantizaría la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas y en cuanto a la implementación, verificación y refrendación del Acuerdo.

A su vez, GPaz resalta de lo Acordado en la negociación la “creación de institucionalidad y la incidencia de las mujeres en la labor de todas las instituciones creadas para el seguimiento y verificación del cumplimiento del Acuerdo de Paz”, así como “la incorporación del enfoque de género en los aspectos étnicos, que tendrá en cuenta de manera prioritaria la afectación de las mujeres pertenecientes las comunidades etno-raciales en el conflicto” (Gpaz, 2018, p. 41) Y

¹⁵ Las 122 medidas pueden ser consultadas en el siguiente informe:
https://www.humanas.org.co/alfa/dat_particular/ar/ar_7354_q_Equidad-Genero-Mujeres-Acuerdo-final-1-1.pdf

resaltan en su Informe La Paz Avanza con Mujeres que el mayor logro ha sido “consolidar la obligación específica de priorización de las necesidades prácticas y estratégicas de los movimientos de mujeres, identificando sus múltiples discriminaciones” (Gpaz, 2018, p.41).

Esto deja ver a grandes rasgos que la inclusión de un enfoque de género de forma transversal a todos los puntos del Acuerdo Final es una innovación en materia de procesos de paz en el mundo. De ahí que, cuando se pactan las bases para la terminación del conflicto armado colombiano con las gafas del género puestas, se amplían las perspectivas y se reconocen las diferencias existentes entre los seres humanos desde la construcción social no totalizante o hegemónica.

4. Los instrumentos jurídicos en el marco del conflicto armado: Herramientas que transforman los estereotipos de género en Colombia.

Luego de abordar una descripción general de los instrumentos normativos creados por el Estado colombiano para la atención de los diferentes fenómenos a los que se enfrentan las mujeres en contextos de conflicto armado, se evidencia que hay condiciones estructurales y sistemáticas que impiden la garantía a sus derechos fundamentales y que profundizan la violencia, presentes incluso antes de los episodios de guerra al interior del territorio.

De ahí que, el balance de los grandes avances normativos y de precedente judicial que se pretende medir en este aparte, se hará en términos del reconocimiento por parte del Derecho de estas condiciones o riesgos basados en el género a los cuales se enfrentan las mujeres de forma sistemática o que ya están presentes tradicionalmente en la sociedad. Y la forma en cómo este reconocimiento legal y diseño de herramientas para resolver los fenómenos contribuyen a la transformación progresiva de los estereotipos de género que profundizaron los repertorios de violencia perpetrados en su integridad durante el conflicto armado.

Es pertinente señalar que la violencia sistemática fue reconocida en diferentes herramientas jurídicas que se describen en el capítulo anterior, gracias a la constante movilización de las organizaciones feministas y de derechos humanos exigiendo una atención y diseño de herramientas jurídicas con enfoque diferencial y con más participación de mujeres en los espacios políticos y de decisión institucional. Este cambio de perspectiva desde las organizaciones de mujeres pone de presente que:

La interlocución con el Estado vino de la mano de una revalorización del papel instrumental del derecho, de su importancia como herramienta para transformar la realidad social, y con ello el convencimiento de que la reforma legal era otra forma de hacer política. Se dejaron de lado las ideas sobre la dependencia del derecho con las estructuras de poder y su incapacidad transformadora, para dar lugar a la creencia que la reforma legal hace parte de una estrategia más amplia de cambio social, en especial en una pieza central en la transformación cultural. (Lemaitre, 2009a, p. 241)

Sin embargo, no es un trabajo acabado pues la transformación de las condiciones estructurales de desigualdad y los estereotipos de género que se enraízan en la sociedad debe seguir gestándose a través de las herramientas dispuestas por un marco normativo específico con los avances que la realidad social exija.

Ahora bien, hay prácticas judiciales que pueden ser experiencias de transformación social a través de políticas públicas. Así lo deja ver la intervención de la Corte Constitucional por medio de la decisión plasmada en la Sentencia T-025 de 2004, toda vez que allí “se consolida como mecanismo de protección de los derechos cuando se presenta una vulneración repetida, generalizada y sistemática de los derechos de un grupo significativo de la sociedad” (Cepeda, 2012, p. 11). Adicionalmente, estructura herramientas tales como los autos de seguimiento como un mecanismo de control y evaluación del acatamiento por parte del Estado de las disposiciones de la sentencia.

Así, para el caso de las mujeres víctimas del conflicto armado el Auto 092 de 2008 marca un importante avance en el reconocimiento de las dinámicas estructurales que se enmarcan en estereotipos de género que recaen en las mujeres y que representan a su vez, riesgos para la profundización de la violencia diferenciada durante y después del conflicto armado. Entonces, identifica diez (18) patrones de violencia y discriminación basados en el género que promueven el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado. Fernanda Bermeo los enumera de la siguiente forma:

1. De violencia, explotación sexual o abuso sexual en el conflicto armado
2. De explotación o esclavización para labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad patriarcal
3. De reclutamiento forzado de hijos (as) por grupos armados al margen de la ley
4. Derivados del contacto o relaciones familiares con integrantes de grupos al

margen de la ley o fuerza pública

5. Derivado de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas
6. De persecución y asesinato por estrategias de control coercitivo
7. Por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o desintegración de su grupo familiar
8. De ser despojadas de sus tierras y sus patrimonios
9. Derivados de la condición de discriminación o vulnerabilidad acentuada de mujeres indígenas o afros
10. Pérdida o ausencia de su proveedor económico durante el proceso de desplazamiento (Bermeo, 2011, p. 10)

Para estos riesgos de género, ordenó la formulación de trece programas a saber:

- El Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Comunitaria contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas.
- El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas.
- El Programa de Apoyo a las Mujeres Desplazadas que son Jefes de Hogar, de Facilitación del Acceso a Oportunidades Laborales y Productivas y de Prevención de la Explotación Doméstica y Laboral de la Mujer Desplazada.
- El Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres Desplazadas Mayores de 15 Años.
- El Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la Tierra por las Mujeres Desplazadas.
- El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas
- El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Afrodescendientes Desplazadas.
- El Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia contra las Mujeres Líderes o que adquieren Visibilidad Pública por sus Labores de Promoción Social, Cívica o de los Derechos Humanos.
- El Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres Desplazadas como Víctimas del Conflicto Armado a la Justicia, la Verdad, la Reparación y la No Repetición.

- El Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas.
- El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema de Protección por las Mujeres Desplazadas. (Corte Constitucional, 2008, Auto 092)

Además, la Corte reconoció los obstáculos que enfrentan las mujeres para denuncias y/o judicializar adecuadamente los hechos de violencia sexual y para ello ordenó a la Fiscalía General de la Nación:

- Un registro oficial de violencia sexual que dé cuenta de la adopción de correctivos radicales de forma inmediata, por parte de todas las autoridades con competencias en este campo” y que supere prácticas habituales como: (a) la subvaloración de este delito frente a otros y distorsión del mismo como crimen pasional. (b) los sistemas no cruzan violencia sexual con conflicto armado y menos con desplazamiento (Fiscalía, Medicina Legal, Policía). (c) Faltan categorías de registro. (d) No existen protocolos de detección de la violencia sexual.
- Sistemas de formación para funcionarios públicos, que los sensibilicen frente al problema y frente a las necesidades especiales de atención de las víctimas de la violencia sexual;
- Mecanismos de investigación para superar la impunidad de los perpetradores, particularmente, si pertenecen a grupos armados ilegales –impunidad que se predica tanto en el sistema de justicia penal ordinario como del sistema establecido por la ley 975 de 2005- (Corte Constitucional, 2008, Auto 092)

La Organización feminista no gubernamental Casa de la Mujer, destaca las siguientes consideraciones con respecto al Auto de seguimiento 009 de 2015:

El deber de debida diligencia respecto del Estado colombiano, en términos de prevenir la violencia sexual contra las mujeres, atender y proteger a las víctimas y garantizar la investigación y juzgamiento de los responsables, acorde con instrumentos del Sistema Universal de DDHH como la CEDAW, y del Sistema Interamericano como la Convención de Belém do Pará, entre otros. (Casa de la Mujer, 2015)

Además, la Corte establece una presunción de proximidad entre los hechos de violencia sexual, el conflicto armado y el desplazamiento forzado:

“como una forma amplia de interpretar las violencias contra las mujeres, que, a juicio de la Casa de la Mujer, recoge en alguna medida lo que las organizaciones feministas han expresado respecto a un continuum de violencias contra las mujeres, que se exacerba en el marco del conflicto armado, pero que está relacionado con factores estructurales de discriminación histórica y subordinación de las mismas” (Casa de la Mujer, 2015, p. 4)

Por otro lado, con respecto a la Ley 1448 de 2011 o conocida como Ley de Víctimas, señala que los protocolos establecidos para la investigación de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales a cargo de la Fiscalía General de la Nación son un mandato importante. Sin embargo:

En el país existen actualmente varios protocolos en el mismo sentido, sobre los cuales las críticas han recaído, no tanto en su diseño, como en su implementación, y en su capacidad de articularse entre sí. La Ley de Víctimas no incluye consideraciones en este sentido. Por lo mismo, resulta imperativo que estos procesos consulten a las organizaciones de mujeres, especialistas en el tema de violencia sexual, e incorporen sus aprendizajes. (Corporación Humanas, 2012, p. 20)

En el Informe de Seguimiento realizado por la Casa de la Mujer La Fiscalía General de la Nación ha desarrollado un base de datos exclusiva y diferencial para los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Dicha Entidad también: “ha adelantado procesos de sensibilización, capacitación de temas relacionados con la forma en que se abordan los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado y ha conformado el Comité intrainstitucional del Género en la FGN” (Casa de la Mujer, 2015, p. 23)

Por otro lado, las autoras Rincón y Osorio resaltan que en desarrollo de la Ley 1257 de 2008, los lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres (septiembre de 2012) y el documento conpes 161 de equidad de género de las mujeres (marzo 2013) reflejan una intencionalidad por fortalecer las capacidades de las mujeres en una sociedad que busca justicia social en conjunto y que busca el ejercicio pleno de derechos a las mujeres del país, orientando la acción pública a la tarea aún pendiente que no es otra que “la remoción de las condiciones de discriminación en razón a estereotipos sociales y culturales que obstaculizan proyectos de vida e impiden el ejercicio ciudadano y la construcción social” (2015,

p.78).

Respecto al Registro Único de Víctimas la Ley 1448 de 2011 indica que para que una persona sea incluida y tenga derecho a la reparación integral, tiene cuatro años desde la fecha en que se promulgó la Ley para presentar su declaración y si el hecho del cual fue víctima ocurrió después del año 2011, tiene un plazo de dos años contados a partir del momento en el que ocurrió la victimización. Es importante anotar la Sentencia T 211 de 2019 emitida por la Corte Constitucional Colombiana en la que exige a la Unidad de Víctimas incluir en el Registro Único de Víctimas a mujeres que sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado, sin importar la fecha en que ocurrió el hecho ni el momento de la declaración y sin rigorismos formales en referencia a los plazos que exige para hacer la declaración.

En consecuencia, insta a que:

los jueces del país para que den cumplimiento a lo dispuesto por esta Corporación en los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015 de la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, y en tal sentido, resuelvan las solicitudes de inclusión en el RUV de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado sin rigorismos formales y en amparo integral de sus derechos constitucionales. (Corte Constitucional, T-211, 2019)

Esto refleja entre otras cosas que persiste una ausencia de lo que Cubides y Chacón mencionan como:

inclusión del criterio de género al momento del registro de víctimas ha marcado notablemente los últimos años el reconocimiento de víctimas por la UARIV; sin embargo, este criterio no da cuenta de los primeros años del conflicto y, en el caso de los crímenes contra la libertad sexual, están marcados por la ausencia real de denuncias que impide medir, proteger y reparar a las mujeres víctimas de esas violencias (2017, p. 71)

Pese a ello, se resalta que las herramientas jurídicas creadas para la atención de mujeres víctimas tienen en cuenta los principales riesgos a los que se enfrentan en razón de estereotipos tradicionalmente impuestos al género femenino. Por ejemplo, el acompañamiento psicosocial a las mujeres víctimas de violencia sexual evidenciados en el capítulo anterior da cuenta del propósito principal de mitigar los impactos emocionales y psicológicos que padecieron durante el conflicto armado

De otro lado, las diferentes herramientas de acceso a la educación básica y superior de la que trata la Ley de Víctimas y Restitución de tierras, nos permiten evidenciar de qué forma el Estado puede promover el fortalecimiento y autonomía de las mujeres. Además, del objetivo específico al que se refiere La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas¹⁶ sobre “brindar herramientas de educación financiera, contribuir al fortalecimiento de los proyectos de vida de las mujeres y las reparaciones simbólicas” (Unidad para las Víctimas, 2018, p. 14). Para ello, ha desarrollado una metodología de acompañamiento que se desarrolla a través de seis líneas a saber:

1. Superación del subregistro en el Registro Único de Víctimas de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado
2. Armonización de las rutas individual y colectiva para garantizar el acceso prioritario y especializado de las mujeres
3. Actualización e incorporación de los lineamientos del enfoque diferencial y de género en las medidas de reparación integral para personas víctimas de violencia sexual
4. Acceso a la oferta institucional del SNARIV de las personas víctimas de violencia sexual
5. Proceso territorializado y grupal de reparación integral a víctimas de violencia sexual
6. Seguimiento y evaluación a la implementación

Sobre las reparaciones simbólicas se ha encargado en particular, el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es importante evidenciar el balance que ha hecho esta Entidad sobre las contribuciones a las reparaciones simbólicas y aporte a la memoria histórica del País y de mujeres víctimas.

Es relevante el enfoque de género que ha implementado en los informes de memoria histórica del conflicto en el país, y en particular, de los escenarios de violencia contra las mujeres. Pues, el estudio que han desarrollado para la construcción de los informes también ha implicado

¹⁶ “La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una institución creada en enero de 2012, a partir de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.” Rescatado de: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-unidad/resena-de-la-unidad/126>

preguntarse de las experiencias específicas que han tenido víctimas, victimarios y espectadores; evidenciando que tienen una perspectiva diferente de su experiencia en la guerra. La experiencia de las víctimas depende de: “la construcción del sexo y del lugar social que ocupan los individuos, dependiendo de las lecturas que se hacen de su genitalidad, rasgos físicos y componentes hormonales y genéticos, en contextos determinados” (CNMH, 2018, p. 105).

Esta metodología e implementación de un enfoque de género en las investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica promueven que los hechos de violencia que han sufrido las mujeres en el marco del conflicto armado se narren y se construya una historia oficial de la guerra teniendo en cuenta los matices y contextos teóricos que reconocen las construcciones diferenciadas entre hombres y mujeres dentro de la sociedad. Pues esto permite que el Estado mismo diseñe un dossier de herramientas jurídicas que permitan superar estos fenómenos y transformar los contextos de violencia. Al respecto ha concluido en el último balance realizado que “la idea es que por medio del importante trabajo de esta institución se puedan retar los entendimientos más tradicionales del sexo y la sexualidad en el concierto social...” si bien esto implica confrontar las nociones ortodoxas de la historia y el conocimiento, también conlleva a interrogar al pensamiento feminista y de género de manera constante. Pues, concluye que de este modo:

“se le puede brindar a la sociedad colombiana una herramienta pertinente para entender el lugar que tuvo el género en las dinámicas del conflicto armado y construir un país que acoja la diversidad como uno de los pilares de su fortaleza.” (CNMH, 2018, p. 110)

Finalmente, esta implementación normativa en el marco del conflicto armado y la manera en cómo reconoce la afectación diferenciada a las mujeres que sufrieron algún repertorio de violencia, puede contribuir a la transformación de ciertos arraigos presentes en la sociedad colombiana y que promovieron de forma negativa a la profundización de aquellos métodos de control por parte de grupos armados al margen de la Ley e incluso, los mismos agentes del Estado. Pues, como afirma Julieta Lemaitre en su texto *Legalismo Feminista*, las reformas legales han contribuido a crear realidades sociales que propenden por transformar estas injusticias a través de nuevos significados y también de actividades concretas. Creando así nuevas prácticas legales y usos del vocabulario. A su vez:

el poder moral del derecho y la certeza que da la ley consagrada en un marco normativo,

derroca las costumbres tradicionales que naturalizan el patriarcado y motivan el activismo o la movilización de mujeres de diversos orígenes, e incluso hombres que simpatizan con ellas. (Lemaitre, 2009b, p. 8)

Respecto a lo anterior, el autor Rodrigo Uprimny nos menciona la importancia del papel del Derecho en las transformaciones de realidades sociales:

Las prácticas constitucionales de algunos países han experimentado avances en cuanto a abrir espacios de ejercicio de derechos fundamentales, avances que en años anteriores era difícil imaginar. Ya sea por la actuación de Cortes constitucionales de rasgos progresistas, o bien por la acción de grupos de la sociedad civil con estrategias de intervención claramente demarcadas, o por ambas cosas a la vez ... habría que agregar que en los Estados estos procesos implicaron la apertura de espacios antes inexistentes para que las demandas grupales silenciadas por la urgencia inmediata de los años anteriores –poner fin a los regímenes y las prácticas autoritarias – comenzaran a articularse en la esfera pública, utilizando el lenguaje de los derechos. (Uprimny, 2011, p. 12)

Así, la transformación del derecho viene dada por la reunión de elementos que operan y actúan en contra del sistema, proporcionando alternativas en su modo de verle. En la evolución del derecho se ha logrado que existan rutas de escape, como los derechos humanos, contenidos en la constitución. En ese sentido, los instrumentos jurídicos promueven a la transformación de los estereotipos de género ya que, como lo señala Gargarella:

“Los cambios que se operan en el derecho, impactan sobre las demás esferas de la sociedad” y a su vez “(...) los cambios que se hagan o no en esas otras esferas tienden a impactar sobre los contornos, los contenidos y la vitalidad del derecho vigente.” (Gargarella, 2011, p. 21).

Conclusiones

En el caso del conflicto armado las mujeres en Colombia han sufrido un impacto en sus proyectos de vida y en el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Este impacto se estudió teniendo como base las diferentes categorías de análisis que se han construido desde las

teorías feministas para el fenómeno de la violencia contra las mujeres.

En ese sentido, se agruparon siete (7) repertorios de violencia subdivididos en múltiples modalidades en que eran ejercidos por parte de actores armados y se identificaron cuáles eran los estereotipos de género que los promovían y que de alguna u otra forma, profundizaron el dolor infringido a los cuerpos y mentes de las mujeres colombianas. Con ello se identificó una conexión entre sus efectos y un orden social patriarcal previamente establecido en la sociedad, que de forma tradicional o cultural avalaban estas formas de violencia sobre las mujeres.

En respuesta a estos fenómenos, el Derecho ha diseñado un dossier de herramientas jurídico-políticas que se analizaron con el fin de establecer cuáles eran sus objetivos principales y las rutas que se aplicarían para la atención de las diferentes problemáticas a las cuales se enfrentan las mujeres que han sido víctimas de violencia en el conflicto armado. Se realizó una descripción temporal del diseño e implementación de este marco normativo, evidenciando un avance significativo con el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia T 025 del 2004 y el Auto de seguimiento 092 del 2008. Pues este precedente judicial -aunque es tardío con respecto al tiempo en que se llevaron a cabo la ocurrencia de los hechos violentos contra las mujeres- marca las pautas específicas que deben seguir algunas Entidades del Estado para la formulación e implementación de políticas públicas con un enfoque de género o diferencial. Estas pautas se verían reforzadas con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 o conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Sobre la base de los argumentos previamente planteados, se reconoce que estas herramientas jurídicas han sido implementadas paulatinamente por el Estado colombiano y sancionan específicamente los repertorios de violencia que se evidenciaron en el capítulo dos, persiguiendo no solo el ejercicio del poder punitivo, la reparación del daño causado sino también la mitigación de los estereotipos de género que profundizaron la ocurrencia de los mismos. Lo anterior, por medio de recursos para las mujeres víctimas en términos de políticas y programas diseñados con el propósito de reducir la inestabilidad económica, exclusión del sistema educativo. Así como la prevención contra la ocurrencia reiterativa de hechos violentos, no solo de la sociedad en general sino desde los mismos funcionarios públicos encargados de la aplicación de dichas políticas y programas.

Se identificó que no es una tarea acabada pues a partir del año 2016 el Estado colombiano

firmó un Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con las FARC-EP; este Acuerdo comprometió a las partes negociantes a una serie de acciones afirmativas para la erradicación de las causas que generaron el conflicto de las que se espera su implementación paulatina.

Cada compromiso tiene inmerso un enfoque de género transversal que ha sido implementado gracias al cabildeo de las organizaciones de mujeres que encuentra en este acuerdo una herramienta importante que sirve a sus intereses por la transformación permanente de estereotipos sobre el género femenino, los cuales han promovido la ocurrencia de hechos de discriminación y que las han mantenido en condiciones desiguales para el ejercicio libre de sus derechos fundamentales y proyectos de vida; hechos de las que han sido víctimas incluso antes de encontrarse en contexto de un conflicto armado.

Referencias Bibliográficas

Alvear, H y Jaramillo, I. (2012) Feminismo y crítica jurídica. El análisis distributivo como alternativa crítica al legalismo liberal. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

Amorós, C y de Miguel, A. (2007) Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. De la Ilustración al segundo sexo. Minerva Ediciones, 2.^a ed., vol. 1. Madrid, España. 13-90.

Alcoff, L. 2001. Feminismo cultural versus post-estructuralismo: la crisis de la identidad en la teoría feminista. In. Navarro, m. & Stimpson, C. (comps.): Nuevas Direcciones. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina.

Barragán, C. (2016). Violencia de género, la mujer como arma de guerra en el conflicto armado colombiano. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Programa de Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bogotá, Colombia.

Bartolomei, M. L. (2001). Género y derechos humanos: Reconocimiento de la pluralidad e intersección de las diferencias. Novum Jus. Bogotá, Colombia. 183-204.

Butler, J. (2007). El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad. Paidós. Barcelona, España.

Bermeo, D. (2011). Análisis del auto 092 de 2008 de la corte constitucional desde la perspectiva de género. Revista FORUM; Vol. 1, núm. 2. Bogotá, Colombia.

Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, (2017). La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado. Bogotá, Colombia.

Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, (2015). Crímenes que no prescriben. La violencia sexual del Bloque Vencedores de Arauca. Bogotá, Colombia.

Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, (2011). La memoria histórica desde la perspectiva de género. Conceptos y herramientas. Bogotá, Colombia.

Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, (2018). Género y memoria histórica. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico, Bogotá, Colombia.

Cepeda, R. E. (2012). La Corte Constitucional y conflicto armado. Control de políticas sociales en el marco del conflicto armado. Ed. Universidad Santo Tomás. Medellín, Colombia. 425-453.

Consejo Nacional de Política Económica y Social. Departamento Nacional de Planeación. Documento Conpes 3784, (2013). Lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. Bogotá, Colombia. Rescatado de: <http://historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/Conpes-3784-Mujeres-victima-conflicto-armado.pdf>

Chávez, H. E., Cubides, C. J., & Vivas, B. T. G (2016). Derechos humanos, paz y posconflicto en Colombia. Colección IUS público; no.9., Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia.

Chaparro, G, N. y Martínez, M. (2016) Negociando desde los márgenes: la participación

política de las mujeres en los procesos de paz en Colombia (1982-2016). Dejusticia. Bogotá, Colombia. Rescatado de: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_925.pdf

Comisión Colombiana de Juristas (2007). Anotaciones sobre la Ley de “justicia y paz”, una mirada desde los derechos de las víctimas. Bogotá, Colombia. Rescatado de: http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/anotaciones_sobre_la_ley_de_justicia_y_paz.pdf

Casa de la Mujer (2015). Informe de seguimiento al cumplimiento del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional de Colombia. Bogotá, Colombia.

Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género (2012). 32 preguntas y respuestas sobre la Ley de Víctimas. Bogotá, Colombia. Rescatado de: <https://www.humanas.org.co/archivos/cartlildisreducido.pdf>

Curiel, O. (2009) Descolonizando al feminismo: Una perspectiva desde América Latina y del Caribe. Coloquio Latinoamericano sobre Praxis y Pensamiento feminista. Buenos Aires, Argentina.

De Beauvoir, S. (1999). Introducción. El Segundo Sexo. Cátedra. Madrid, España 1-12

Hernández, L. (2016) Acciones afirmativas para las mujeres víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado en Colombia. Artículo de Reflexión, Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia. Rescatado de: <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13746/4/Acciones%20Afirmativas%20para%20las%20mujeres%20v%C3%ADctimas%20de%20violencia%20sexual%20%20Conflicto%20Armado.pdf>

In Cubides, C. J. A., & Chacón. T. N. (2017). Desafíos contemporáneos de la protección de los derechos humanos en el Sistema Interamericano. Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia.

Lazo, N. G. (2013). Feminismos, concepto sexo-género y derecho, en Ana Sánchez y Núria

- Beltrán (coord.), Análisis feminista del derecho. Teorías, igualdad, interculturalidad y violencia de género. Universidad de Barcelona. Barcelona, España. 15-33.
- Lemaitre, J. (2009a). Derechos LGBT en el nuevo milenio. El derecho como conjuro: Fetichismo legal, violencia y movimientos sociales. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 239-273
- Lemaitre, J. (2009b). Legalismo feminista: Los derechos de las mujeres en los años noventa El derecho como conjuro: Fetichismo legal, violencia y movimientos sociales Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 197-237
- Mesa de trabajo mujer y conflicto armado. (2010). X Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Bogotá, Colombia.
- Observatorio de Memoria y Conflicto-OMC (2018). Disponible en: <http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/>
- Rincón, L.C. y Osorio, P. V. (2015). Una mirada a doble vía: lo internacional y lo nacional en el encuadre normativo en Colombia, en Doonny Meertens (y otros 13); Ed. Martha Lucía Gutiérrez Bonilla. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 67-112
- Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficantes de sueños. Madrid, España.
- Suárez, M. (2002). Teoría feminista, Política y Derecho. Madrid, España.
- Unidad para las Víctimas y Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres – ONU mujeres. (2018). Estrategia de reparación integral a mujeres víctimas de violencia sexual. Bogotá, Colombia.
- West, Robin, (2004). Género y Teoría del Derecho. Ediciones Uniandes. Bogotá, Colombia.

Normatividad

Congreso de Colombia, Constitución Política de Colombia de 1991. Disponible en:
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

Congreso de la República, Ley 1448 de 2011. Disponible en:
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Normal.jsp?i=43043#0>

Congreso de la República, Ley 975 de 2005. Disponible en:
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0975_2005.html

Congreso de la República, Ley 1719 de 2014. Disponible en:
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1719_2014.html

Congreso de la República, Ley 1257 de diciembre de 2008. Disponible en:
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1257_2008.html

Congreso de la República, Ley 397 de 1997. Disponible en:
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0360_1997.html

Congreso de la República, Ley 387 18 de julio de 1997. Disponible en:
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0387_1997.html

Decreto 4800 del 20 de diciembre de 2011 [Ministerio de Justicia]. Por medio del cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones. Disponible en:
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Normal.jsp?i=45063>

Gobierno Nacional y las FARC-EP (2016). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Disponible en
<http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>

(09.03.18)

Jurisprudencia

Corte Constitucional Colombiana. T – 025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm>

(09.03.18)

Corte Constitucional Colombiana. Auto 092 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm>

(09.03.18)

Corte Constitucional Colombiana. Auto 009 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/T-025-04/AUTOS%202015/Auto%20009%20del%2027%20de%20enero%20de%202015seguimiento%20ordenes%20%20y%203%20del%20auto%20092-08.pdf>